

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  
Trabajo Fin de Grado



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA  
TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA  
2010/64/UE EN ESPAÑA, FRANCIA Y  
AUSTRIA

Transposición de la Directiva 2010/64/UE y análisis  
jurisprudencial en los procesos penales en los  
ordenamientos jurídicos español, francés y austríaco

Sara Osuna Granda  
Dra. Da. Icíar Alonso Araguás  
Salamanca, 2018



## **RESUMEN**

La interpretación judicial en juicios penales es una profesión que, desde sus inicios, acarrea una serie de consecuencias negativas para las garantías procesales de las que gozan los acusados a lo largo de todo un procedimiento. Debido al desconocimiento de la figura del intérprete judicial por parte de la mayoría de los operadores jurídicos del órgano jurisdiccional, la calidad del ejercicio de la interpretación proporcionada en sede judicial se ha visto gravemente afectada. Por ello, en el año 2010, se publica en el DOUE la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Esta Directiva fija como objetivo garantizar el derecho a la interpretación y traducción de toda persona acusada que no hable o no comprenda la lengua del proceso y, de esta manera, garantizar su derecho a un juicio equitativo y reforzar los derechos procesales de los ciudadanos. Los Estados miembros adoptaron las disposiciones legales necesarias para cumplir con los objetivos contenidos en la Directiva, pero existen diferencias en su regulación. En este análisis contrastivo se establecerán los puntos en común y las diferencias existentes en la regulación de esta materia en el marco de tres ordenamientos jurídicos de tres Estados miembros de la Unión: España, Francia y Austria.

## **PALABRAS CLAVE**

Derecho a la interpretación y a la traducción; Garantías procesales; Proceso penal; Proceso equitativo; Directiva 2010/64/UE; Orden jurisdiccional penal; Acusados; LO 5/2015; Registro de traductores e intérpretes judiciales; LECrim; Normativa pre-directiva; Normativa post-directiva.

## **RÉSUMÉ**

Depuis qu'elle existe, l'interprétation judiciaire lors de procédures pénales est une profession qui engendre une série de conséquences négatives sur les garanties procédurales dont bénéficient les accusés tout au long de ladite procédure. En effet, la qualité de l'interprétation produite dans les organes judiciaires s'est vue gravement touchée, car la majorité des opérateurs juridiques de l'organe judiciaire ne connaissent pas le statut de l'interprète judiciaire. Par conséquent, la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, a été publiée dans le JOUE. Elle fixe comme objectif la garantie du droit à l'interprétation et la traduction pour toute personne accusée qui ne parle ou ne comprend pas la langue utilisée lors d'un procès et, de cette manière, la garantie du droit à un procès équitable et du renforcement des droits procéduraux des citoyens. Les États membres ont adopté les dispositions légales nécessaires afin de remplir les objectifs de la Directive, mais ils ne la transposent pas tous de la même manière. L'analyse qui suit établit les points communs et les différences en ce qui concerne l'application de cette question dans le cadre des systèmes juridiques de trois États membres de l'Union européenne : L'Espagne, la France et l'Autriche.

## **TERMES CLÉS**

Droit à l'interprétation et à la traduction ; Garanties procédurales ; Procédure pénale ; Procès équitable ; Directive 2010/64/UE ; Juridiction pénale ; Accusés ; Registre des traducteurs et interprètes judiciaires ; Loi de procédure pénale espagnole ; Législation pré-directive ; Législation post-directive.



## ÍNDICE DE ABREVIATURAS

|        |   |
|--------|---|
| APTIJ  | Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes<br>Judiciales y Jurados |
| CEDH   | Convenio Europeo de Derechos Humanos  |
| CENDOJ | Centro de Documentación Judicial  |
| DOUE   | Diario Oficial de la Unión Europea  |
| LCF    | Ley Constitucional Federal  |
| LECrim | Ley de Enjuiciamiento Criminal  |
| LO     | Ley Orgánica  |
| LOPJ   | Ley Orgánica del Poder Judicial   |
| MAEC   | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y<br>Cooperación            |
| SAN    | Sentencia de la Audiencia Nacional  |
| SAP    | Sentencia de la Audiencia Provincial  |
| STS    | Sentencia del Tribunal Supremo  |
| STSJ   | Sentencia del Tribunal Superior de Justicia                                 |
| TEDH   | Tribunal Europeo de Derechos Humanos  |
| TS     | Tribunal Supremo  |
| UE     | Unión Europea   |

## TABLA DE CONTENIDOS

|  |        |
|--|--------|
| 1. INTRODUCCIÓN.....   | - 1 -  |
| 2. METODOLOGÍA.....  | - 2 -  |
| 3. HIPÓTESIS .....   | - 4 -  |
| 4. CONTEXTO EUROPEO Y MARCO TEÓRICO .....  | - 6 -  |
| 5. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ORGANIZACIÓN DEL ORDEN JURISDICCIONAL ..... | - 9 -  |
| 5.1. España.....   | - 9 -  |
| Orden jurisdiccional penal español .....   | - 11 - |
| 5.2. Francia .....   | - 12 - |
| Orden jurisdiccional penal francés .....   | - 14 - |
| 5.3. Austria.....  | - 17 - |
| Orden jurisdiccional penal austríaco .....   | - 18 - |
| 6. NORMATIVA PRE-DIRECTIVA DE CADA PAÍS .....  | - 20 - |
| 6.1. España.....   | - 20 - |
| 6.2. Francia .....   | - 21 - |
| 6.3. Austria.....  | - 22 - |
| 7. NORMATIVA POST-DIRECTIVA EN CADA PAÍS.....  | - 24 - |
| 7.1. España.....   | - 26 - |
| 7.2. Francia .....   | - 31 - |
| 7.3. Austria.....  | - 36 - |
| 8. JURISPRUDENCIA.....   | - 39 - |
| 8.1. España.....   | - 40 - |
| 8.2. Francia .....   | - 41 - |
| 8.3. Austria.....  | - 42 - |
| 8.4. Conclusiones del análisis jurisprudencial .....   | - 43 - |
| 9. CONCLUSIONES.....   | - 44 - |
| 10. BIBLIOGRAFÍA .....   | - 46 - |
| 10.1. Bibliografía .....   | - 46 - |
| 10.2. Webgrafía.....   | - 46 - |
| 10.3. Bibliografía normativo-legal.....  | - 49 - |





## 1. INTRODUCCIÓN

En este Trabajo de Fin de Grado he querido realizar una comparación de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales en tres ordenamientos jurídicos europeos: el ordenamiento español, el ordenamiento francés y el ordenamiento austriaco. Este derecho es uno de los primeros que conforman una serie de pautas dirigidas al establecimiento de unas garantías mínimas comunes en los procesos penales que tienen lugar en los Estados miembros de la Unión Europea. Concretamente, la Directiva se inserta dentro del marco establecido para la mejora y el refuerzo de los derechos procesales de los encausados en los procesos penales. Por tanto, esta Directiva tiene por finalidad garantizar el derecho a la interpretación y a la traducción para toda persona sospechosa o acusada que no hable o no entienda la lengua del procedimiento con el objetivo de garantizar, a su vez, un juicio equitativo. En ella se establecen unos mínimos comunes que se aplican en el ámbito de la interpretación y la traducción en los órganos jurisdiccionales de orden penal para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros, así como para una armonización de los ordenamientos jurídicos que conforman la Unión.

Para ello, los Estados deben tomar medidas específicas dirigidas a asegurar el derecho a la interpretación y traducción gratuita, fidedigna y de calidad de las intervenciones orales durante todo el proceso penal y de los documentos escritos no solo en el ámbito de actuación judicial, sino también policial. De esta manera, los Estados miembros adoptaron las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que fueron necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Directiva antes del 27 de octubre de 2013, aunque, como veremos más adelante, hubo casos excepcionales.

Los intérpretes judiciales conforman el punto de conexión comunicativa entre las distintas partes que intervienen en un proceso judicial cuando una de ellas no conoce o no entiende la lengua de procedimiento del Juzgado o Tribunal. La labor del intérprete deviene, de este modo, un requisito más que necesario de la propia justicia, ya que resulta muy complicado juzgar un caso o defender a una persona si carece de una comunicación fluida. Además, el proceso no se ajustaría a derecho. Por ejemplo, el acceso a la información relativa al caso en que se encuentra incurso y un conocimiento de los motivos

de la inculpación son garantías procesales del imputado. Por ello, la reciente globalización e internacionalización, así como la diversidad lingüística que afecta a la ciudadanía han hecho que los órganos jurisdiccionales hayan dado lugar a ciertas carencias en uno de los requisitos más elementales para poder generar un proceso con las garantías debidas: la necesidad de intérpretes judiciales profesionales y debidamente cualificados.

La elección de este tema para mi Trabajo de Fin de Grado se debe a la posibilidad que me brindaba para poder combinar las dos disciplinas que en la actualidad estoy cursando: traducción e interpretación y derecho. Asimismo, dado que la interpretación judicial en España es un tema todavía no lo suficientemente conocido, creo que abordar esta cuestión es interesante de cara a la concienciación de los operadores jurídicos que trabajan con intérpretes judiciales, así como del legislador en lo que se refiere a la regulación de esta materia en nuestro ordenamiento jurídico.

Considero que mi intención e interés por el estudio de este tema puede resumirse perfectamente en palabras de Pilar de Luna:

El intérprete es la persona que da forma a las ideas y deseos del otro. Una especie de actor que ha de interpretar el papel de una persona que puede ser privada de libertad durante muchos años. De ahí la importancia que tiene conocer el verdadero significado de una cosa o equivocarlo. Interpretar correctamente un gesto o desfigurarlo, transmitir o cambiar su sentido, y saber dar o no el correcto significado a las palabras, actitudes y gestos del acusado. Traducir palabras es traducir culturas. (Ponencia para el congreso Jueces para la Democracia. Bilbao, 2010).

## **2. METODOLOGÍA**

El 20 de octubre de 2010 se aprobó la Directiva Europea 2010/64/UE del Parlamento y del Consejo sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales. Dicha Directiva nace con la intención de poner fin a las numerosas quejas de ciudadanos europeos recibidas en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea por el escaso y deficiente servicio de interpretación recibido en sus diligencias con la policía y los procedimientos judiciales cuando no hablan la lengua oficial del país en el que se encuentran en ese momento. De esta manera, la Directiva no solo reconoce el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, sino que establece en

su artículo 9 que tanto la interpretación como la traducción tendrán una «calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y está en condiciones de ejercer el derecho a la defensa» (Directiva 2010/64/UE, art. 9).

Mi estudio pretende analizar la transposición de esa Directiva en diferentes ordenamientos jurídicos de la Unión Europea, concretamente en tres: España, Francia y Austria. Dado que mi combinación lingüística en el grado de Traducción e Interpretación abarca el español como lengua A, el francés como lengua B y el alemán como lengua C, he decidido seleccionar tres países donde mis lenguas de trabajo sean lengua oficial. Concretamente, he seleccionado España porque es el único país dentro de la Unión Europea con español como lengua oficial. También decidí escoger Francia porque, al ser un país desde el punto de vista dimensional más grande que Bélgica, creí que la búsqueda jurisprudencial sería más extensa y habría más material que analizar. Finalmente, también elegí Austria porque, por lo que sabía previamente a la búsqueda de información para este trabajo, su ordenamiento jurídico dedicaba especial atención y estaba muy sensibilizado con la regulación de la interpretación en juicios penales.

Para la elaboración de dicho análisis acudí a las páginas oficiales del Ministerio de Justicia de cada Estado con vistas a conocer el funcionamiento y la estructura de la jurisdicción en cada uno de ellos y, concretamente, la distribución de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al orden penal, ya que es la rama en la que se inserta el estudio pretendido. Asimismo, busqué información sobre la situación en materia de interpretación judicial con anterioridad a la transposición de la Directiva en cada uno de los países para observar las primeras diferencias en el tratamiento de esta materia. A continuación, realicé el análisis de la legislación post-directiva y de los distintos métodos de transposición de la misma en cada sistema jurídico.

Para finalizar, realicé un último análisis de carácter jurisprudencial con la intención de comparar el número de resoluciones judiciales que se emitieron desde abril de 2015 hasta abril de 2018 en materia de interpretación y traducción judicial. Tuve que acudir a los buscadores oficiales de jurisprudencia de cada país y fijar unos criterios de búsqueda (orden jurisdiccional penal, palabras clave: “traducción”, “interpretación”, “idioma”, “Directiva 2010/64/UE”, periodo de búsqueda, etc.). Decidí clasificar las sentencias que encontré en tres grupos: el primero relativo a aquellas en las que se alega

la indefensión de los acusados por la falta de asistencia de intérprete o falta de calidad en las traducciones e interpretaciones ofrecidas por el intérprete en sala, en el segundo de ellos, las resoluciones judiciales hacen referencia a cuestiones procedimentales relativas a la traducción e interpretación en juicio, por ejemplo, la notificación del fallo al acusado tras la correspondiente traducción de la sentencia y, finalmente, la tercera categoría incluye sentencias en las que la parte recurrente interpone un recurso de apelación basándose en el quebrantamiento de normas y garantías procesales, así como el derecho a la traducción e interpretación reconocidos en el art. 123 LECrim y que han causado indefensión a la parte denunciada. Una vez recogidos todos los datos, establecí una comparación a nivel gráfico y una serie de conclusiones que explican el porqué de esta situación.

Para terminar, redacté las conclusiones finales donde retomo la hipótesis que planteo como punto de partida a la hora de abordar el estudio de esta cuestión a la luz de las reflexiones presentadas a lo largo de todo este trabajo. También decidí dividir la bibliografía empleada en tres clases: la webgrafía con la información obtenida de Internet, la bibliografía propiamente legal y la bibliografía manual con estudios de especialistas en el tema.

### **3. HIPÓTESIS**

Mi hipótesis de trabajo parte justamente de que la regulación española en materia de interpretación judicial es prácticamente escasa en comparación con otros ordenamientos que forman parte de la Unión Europea, tales como Austria, un sistema que ya recogía dos leyes que datan del siglo pasado y que, para la época en la que se insertaban, eran bastante completas. Asimismo, el sistema francés, a través de la transposición de la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, permitió garantizar una mejora de la calidad del ejercicio de la interpretación generada (Alberto Notario, 2016: 7), así como establecer unas reglas con vistas a la designación de los intérpretes. En España, además de efectuarse a través de una transposición tardía (donde la propia Comisión Europea tuvo que instar al Gobierno español a que transpusiera la Directiva), no se ha realizado de forma íntegra, ya que, por ejemplo, todavía no se ha habilitado el registro de traductores e intérpretes judiciales cuya creación recomienda la Directiva. No obstante, se ha logrado armonizar

algunos aspectos ya que, en toda la UE, son los países los responsables últimos de la financiación de los costes que generan los servicios lingüísticos, independientemente de que se concedan con o sin empresas externas interpuestas.

Asimismo, mi hipótesis al respecto de por qué en España la implementación de un sistema de interpretación eficaz que garantice plenamente los derechos de los acusados o sospechosos en un juicio penal no ha sido todavía posible se halla, en parte, en la falta de sensibilización por parte de todos los operadores jurídicos, así como colaboradores de la Administración de Justicia en materia de interpretación.

Si partimos de la base de que España se encuentra geográficamente alejada del centro de Europa y de que, la mayoría de sus ciudadanos solo habla con fluidez el castellano y, en su caso, una de las lenguas cooficiales pero ninguna otra lengua extranjera, tal vez podamos hallar el origen del problema. Además, basta analizar la consideración que se tiene en los centros de educación primaria y secundaria nórdicos de las segundas y las terceras lenguas extranjeras en comparación con el sistema educativo en España para darse cuenta de que tres horas semanales de inglés como única lengua extranjera son, desde mi punto de vista, insuficientes. Además, si este es el sistema que se ha implementado para la educación secundaria obligatoria, en niveles superiores postobligatorios, el peso de asignaturas de idiomas en grados y másteres fuera del ámbito de las filologías y la lingüística es prácticamente inexistente. Este desconocimiento y desinterés por el estudio de lenguas extranjeras en el ámbito educativo se traslada a otros ámbitos de la sociedad como la Administración de Justicia. Esto se traduce en que, la falta de sensibilización en materia de interpretación dentro del propio órgano jurisdiccional hace que en las más altas instancias del país no se tenga en cuenta la importancia de una buena formación en comunicación e idiomas y que la regulación en materia de interpretación sea ineficaz.

Todo ello, unido a la tardía incorporación del Grado en Traducción e Interpretación en las universidades españolas en comparación con otras universidades europeas hace que muchas personas desconozcan la labor de un intérprete y, por tanto, que muchos jueces, magistrados e intérpretes de la ley consideren que por el hecho de conocer dos lenguas ya se puede ejercer como tal. Por tanto, esta ignorancia que refleja el legislador en el art. 124.1 de la LECrim sobre los requisitos y condiciones que debe revestir la profesión de un intérprete judicial es lo que tal vez dé lugar a las nefastas

consecuencias que se dan en los juicios penales, acarreadas, a su vez, por la mala praxis. La creencia de que el mero conocimiento de dos idiomas permite el desempeño y ejercicio de intérprete profesional genera el efecto contrario del principal objetivo de la Directiva 2010/64/UE: un juicio donde se violan las garantías jurisdiccionales y el derecho de los acusados y sospechosos a comprender lo que se dice durante el proceso judicial y a hacerse entender.

Como consecuencia, no es sorprendente que dentro de los propios órganos jurisdiccionales se tenga que suspender una vista por la falta de preparación o incluso profesionalidad del intérprete. Todo lo contrario sucede en Austria, donde desde una década anterior a la promulgación de la Directiva ya existía una exhaustiva legislación al respecto y donde las buenas prácticas en materia de interpretación judicial van de la mano de la ley para garantizar un juicio equitativo para las partes en conflicto.

#### **4. CONTEXTO EUROPEO Y MARCO TEÓRICO**

El Diario Oficial de la Unión Europea del pasado 26 de octubre de 2010 publicó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. La Directiva otorga a los sujetos imputados en un proceso penal en un Estado miembro que desconozcan la lengua vehicular del órgano jurisdiccional el derecho a un intérprete durante el proceso, así como el derecho de traducción de los documentos que resulten necesarios para cumplir con las exigencias del derecho de defensa y garantizar el derecho a un juicio equitativo, que a su vez se recogen en el artículo 24 de la Constitución Española donde se ubica el derecho a la tutela judicial efectiva (Constitución Española, 1978, art. 24).

El punto de partida de esta Directiva hay que encontrarlo, por remisión de la Constitución, en tratados internacionales. Entre ellos, encontramos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966. Sendos textos contienen el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete como un mínimo imprescindible y, consecuentemente, como un derecho fundamental de toda persona ante un tribunal cuyo idioma no habla (Gascón Nasarre, 2017: 21). Asimismo, en el párrafo tercero del artículo

6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), se establece: «Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; [...]». A su vez, el artículo 14 recoge la prohibición de discriminación por razón de lengua: «El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación».

La Directiva contiene una serie de normas mínimas comunes a todos los Estados miembros con la finalidad de garantizar un juicio equitativo en cada uno de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Para ello, pretende reforzar los derechos procesales de los imputados o sospechosos en juicio a la vez que aumenta la confianza entre los distintos Estados que conforman la Unión con el propósito de conseguir una mayor cooperación entre ellos y una mayor seguridad jurídica dentro del ámbito judicial.

Además, la Directiva recomienda en cada uno de los Estados la creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales (Directiva 2010/64/UE, art. 5.2), de manera que se cree un listado con la identificación de los profesionales que tengan la cualificación necesaria para ejercer y desempeñar la labor de intérprete a lo largo de todo un procedimiento judicial de carácter penal. No obstante, en la Directiva se evita enumerar los requisitos o condiciones que ha de poseer dicho intérprete, de modo que se permite a los Estados que sean ellos quienes autoricen a los profesionales el desempeño de su cargo en un juicio de acuerdo a los criterios que ellos mismos establezcan.

No hay que olvidar que el derecho a ser asistido por un intérprete un procedimiento penal está financiado por la Administración competente, de manera que es un derecho gratuito para su usuario, dado que no está obligado a pagar el coste derivado de todo el proceso de interpretación que se le proporcione. Por otro lado, para ser beneficiario de este derecho no se requiere que el imputado sea extranjero en el país en el que se le esté juzgando, sino que desconozca la lengua del proceso, ya que una persona puede ser extranjera en un país y conocer perfectamente su lengua oficial o, al menos, hablarla con fluidez. Asimismo, se conforma como un derecho a una interpretación fidedigna y de calidad tanto en las actuaciones judiciales como en las policiales. En otras palabras, el derecho a la interpretación no solo abarca el juicio oral en la sala de vistas,

sino todas las demás fases del proceso judicial, incluyendo: interrogatorio y declaraciones en sede policial, declaraciones y celebración de audiencias previas al juicio, entrevistas con el abogado en sede policial, judicial y centro penitenciario si se ha decretado prisión provisional, etc. (Directiva 2010/64/UE, art. 2.1).

Los destinatarios de las Directivas son los Estados miembros, por lo tanto, esta Directiva 2010/64/UE ha sido transpuesta por todos los países que conforman la Unión a sus ordenamientos jurídicos a través del instrumento jurídico correspondiente, a excepción de Dinamarca, quien ha preferido mantenerse fuera en virtud de la cláusula *opt-out* que le garantiza su Protocolo 22 (Hernández López, 2013: 17). Además, Reino Unido e Irlanda también han decidido participar en la misma haciendo uso de la cláusula *opt-in* que les reconoce el Protocolo 21 anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En la regulación anterior a la Directiva de cada país, el intérprete se encontraba en sala durante el momento de la vista o del interrogatorio. De hecho, se requería obligatoriamente la presencia física del intérprete durante el acto de comunicación entre el acusado y el resto de las autoridades judiciales (Terrero Chacón, 2014: 75). Sin embargo, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la Directiva autoriza el desempeño de la actividad a través de videoconferencia o videollamada siempre que se garantice equidad en el proceso y por imposibilidad acreditada del intérprete (LECrím, 1882, art. 123.5).

Otra de las peculiaridades de este derecho es que es disponible, es decir, es un derecho cuya titularidad corresponde únicamente a los particulares, de manera que pueden disponer de él libremente, de forma que cabe su renuncia en determinados supuestos. Lo único que se exige es que haya tenido lugar un asesoramiento jurídico previo a la renuncia sobre las consecuencias judiciales que su decisión puede acarrear. Además, la renuncia ha de ser libre y expresa.

En suma, el contenido íntegro de esta Directiva 2010/64/UE tiene por finalidad la armonización de las distintas legislaciones internas de los Estados miembros de la Unión, así como el alcance de tres objetivos como son la confianza mutua, la cooperación interestatal y la seguridad jurídica de los ciudadanos.



## **5. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ORGANIZACIÓN DEL ORDEN JURISDICCIONAL**

Antes de realizar el análisis comparativo de la transposición de la Directiva 2010/64/UE en cada uno de los tres ordenamientos jurídicos seleccionados para este trabajo es importante insertar cada uno de ellos en un marco histórico concreto, fundamental a la hora del estudio de las diferencias en el orden jurisdiccional de cada país. Para empezar, huelga decir que España y Francia se componen de un sistema judicial de índole romana, mientras que el orden jurisdiccional en Austria se inscribe en la tradición del derecho anglosajón.

La diferencia esencial radica en sus fuentes del Derecho. En los sistemas del derecho civil y penal, los códigos y leyes regulan todas las posibles eventualidades y los jueces desempeñan un papel limitado en la aplicación del Derecho al caso concreto. Por el contrario, en los sistemas del *Common-law*, la jurisprudencia o precedente judicial, en su traducción literal se considera como la más importante fuente del Derecho, lo que dota a los jueces de un papel mucho más activo en el desarrollo normativo. Hoy en día, la práctica totalidad de los sistemas jurídicos occidentales son una mezcla de las dos tradiciones jurídicas, beneficiándose de cada uno de ellos (Lerner, 2014). Así, los jueces de los dos sistemas resolverán el conflicto jurídico-material que se les plantea encapsulado en una demanda o una querella bajo el mismo conjunto de consideraciones legales y judiciales.

### **5.1. España**

Los Juzgados y Tribunales que conforman la organización jurisdiccional española se pueden analizar desde distintos puntos de vista o criterios:

En primer lugar, el criterio material o de especialización organiza a los distintos órganos en función de la materia de la que tratan. Conforme a este criterio existen cuatro órdenes jurisdiccionales:

- **CIVIL:** se establecen los intereses privados y cualquier otra materia no atribuida a cualquier otro orden jurisdiccional.
- **PENAL:** se resuelve el ejercicio del *ius puniendi* del Estado, es decir, el derecho a penar que posee el Estado.

- **CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:** se discuten los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la actuación de las organizaciones públicas o la propia Administración.
- **LABORAL O SOCIAL:** se tratan intereses cercanos a los ciudadanos con la especificidad del ámbito laboral.

El segundo de los criterios es el criterio funcional o de función procesal. Dentro de este esquema nos encontramos con que se parte de una primera instancia, a continuación, se interpone un recurso que, si se admite a trámite da lugar a una segunda instancia y, en ocasiones tasadas, puede haber la interposición de un recurso extraordinario, como el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este esquema establece que los procesos españoles parten de la existencia de los recursos evolutivos, que suponen que serán resueltos por el órgano superior. Es imprescindible la existencia de un órgano que dicte esa resolución en primera instancia y otro distinto que resuelva en segunda instancia. El criterio aparece matizado porque hay órganos como la Audiencia Provincial, que conoce en primera instancia y en otras ocasiones en vía de recurso (de otro órgano). Con todo, se puede decir que los órganos jurisdiccionales tienen una función preponderante o fundamental y otra secundaria.

Por último, existe el criterio territorial, que nos permitirá conocer la ubicación del órgano jurisdiccional y la circunscripción que comprende, es decir, el ámbito territorial en el que ejercer su jurisdicción. En los arts. 30 y siguientes de la LOPJ se parte de las divisiones administrativas del Estado: Comunidades Autónomas, provincias, municipios y el territorio del Estado por completo (LOPJ, 1985, art. 30).

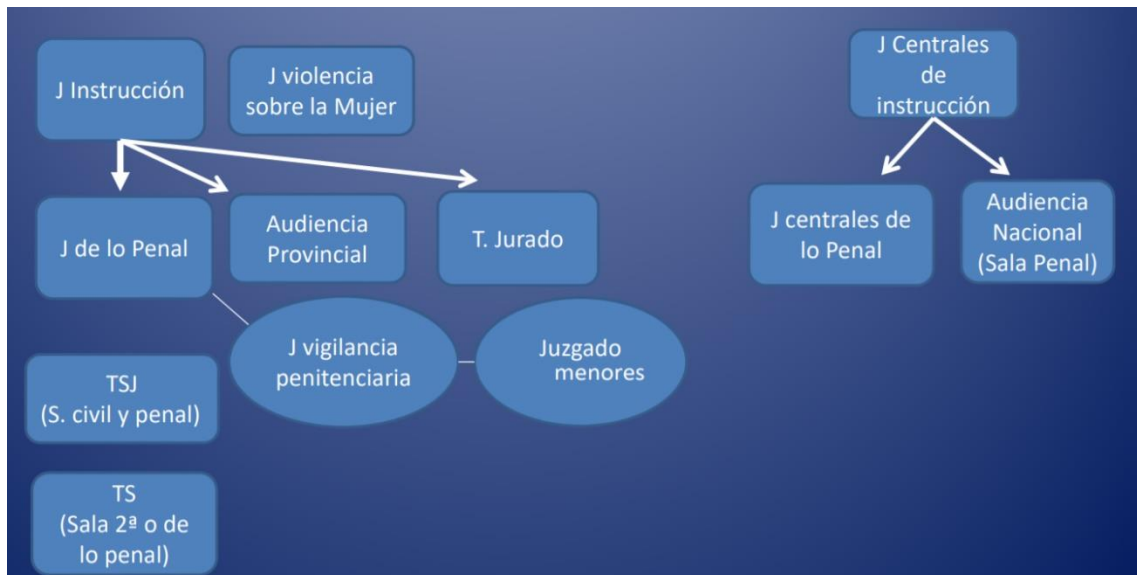
Un esquema de la jerarquía de los órganos jurisdiccionales en España según el ámbito territorial es el siguiente:



**Figura 1.** Órganos jurisdiccionales españoles según el ámbito territorial.  
(Spanish2learn, 2018)

### Orden jurisdiccional penal español

Dentro de los órdenes jurisdiccionales españoles, corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. Es característica del Derecho español que la acción civil derivada de ilícito penal pueda ser ejercitada conjuntamente con la penal. En tal caso, el tribunal penal decidirá la indemnización correspondiente para reparar los daños y perjuicios ocasionados por el delito. El ejercicio de la jurisdicción penal en España corresponde a los siguientes órganos jurisdiccionales: Sala Segunda del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados Centrales de lo Penal, Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Menores, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados de Paz.



**Figura 2.** Órganos que conforman el orden jurisdiccional penal español.  
(Fuentes Soriano, 2016: 2)

## 5.2. Francia

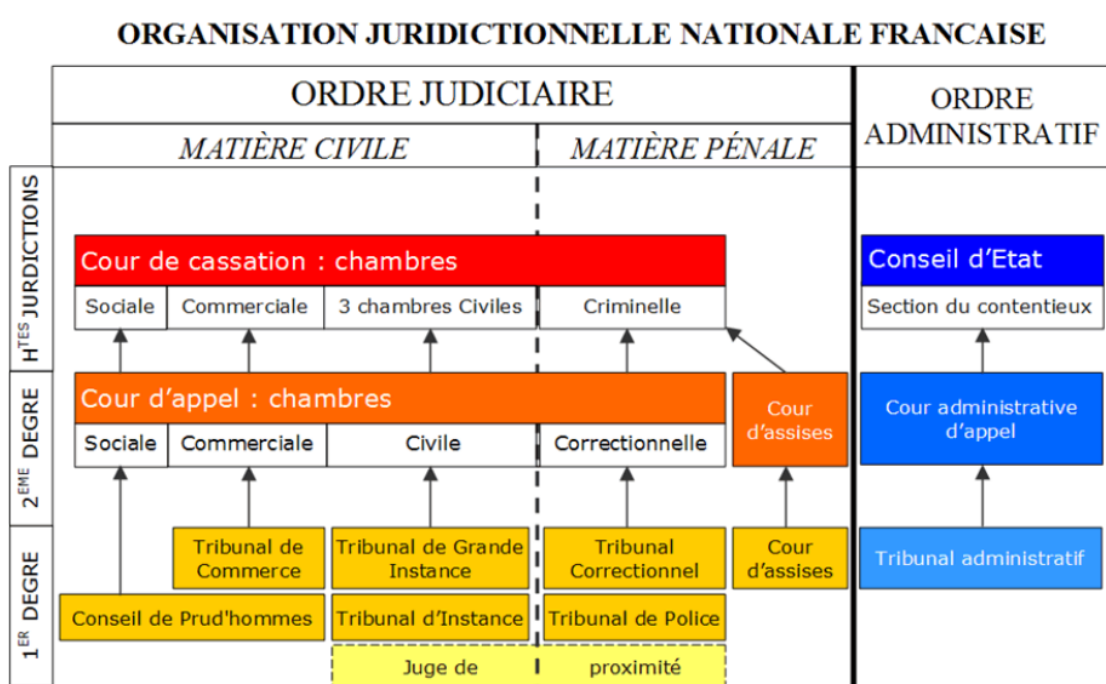
En Francia, el sistema jurisdiccional se caracteriza por una estructura piramidal doble, es decir, coexisten dos órdenes distintos: las jurisdicciones administrativas y las jurisdicciones judiciales. Cada uno de ellos comprende una estructura piramidal: en lo alto, una jurisdicción única y en la base jurisdicciones variadas. Quien no se conforme con una decisión de la justicia puede impugnarla ante la jurisdicción jerárquicamente superior. En cada orden, una jurisdicción única asegura, en última instancia, la unidad de interpretación de la ley por las jurisdicciones inferiores.

Las jurisdicciones administrativas resuelven los litigios entre los ciudadanos y los poderes públicos:

- El Consejo de Estado: juzga en primera y última instancia, es a la vez consejero del gobierno y juez administrativo supremo.
- Las jurisdicciones con competencia general: los tribunales administrativos, los tribunales administrativos de apelación y el Consejo de Estado (como jurisdicción).
- Las jurisdicciones administrativas con competencia especial: las jurisdicciones financieras (Tribunal de Cuentas, cámaras regionales de cuentas, tribunal de disciplina presupuestaria y financiera) y otros (como las comisiones disciplinarias de los colegios profesionales).

Las jurisdicciones judiciales resuelven litigios entre personas y sancionan las agresiones contra las personas, los bienes y la sociedad. Son de tres tipos:

- Las jurisdicciones de primer grado:
  - Las jurisdicciones civiles: los juzgados de primera instancia, los tribunales mercantiles, los juzgados de lo social, los tribunales paritarios de arrendamientos rústicos, las jurisdicciones de la seguridad social.
  - Las jurisdicciones penales:
    - × De derecho común: tribunal de policía, tribunal correccional y tribunal de lo penal.
    - × De excepción: las jurisdicciones competentes en materia de menores y en materia militar, las jurisdicciones políticas y el tribunal marítimo mercantil.
  - Las jurisdicciones de proximidad: pueden depender de las jurisdicciones penales y civiles. Fueron creadas por ley de 9 de septiembre de 2002 para atender la necesidad de una justicia más accesible, más rápida y capaz de ocuparse mejor de los pequeños litigios de la vida cotidiana. Los jueces de proximidad no son profesionales.
- Las jurisdicciones de segundo grado: los tribunales de apelación.
- La jurisdicción suprema: el Tribunal de Casación se encarga de velar por el respeto de las reglas de derecho aplicadas por las jurisdicciones inferiores. Juzga la forma, no el fondo, al contrario de las jurisdicciones de los dos primeros grados, que juzgan los hechos.



**Figura 3.** Órganos jurisdiccionales franceses según el ámbito territorial.  
(Organisation juridictionnelle nationale française, s.f.).

### Orden jurisdiccional penal francés

Dentro del orden jurisdiccional penal francés, nos encontramos con los siguientes órganos jurisdiccionales:

#### 1. *Cour d'assises*

La *Cour d'assises* es un tribunal penal con competencia para juzgar los delitos, es decir, las infracciones más graves, castigados con penas de duración comprendida entre 10 años de reclusión y cadena perpetua.

Se trata de órganos jurisdiccionales de ámbito departamental y no permanente. Las fechas de celebración de sus sesiones se fijan en función de las necesidades. No obstante, en los departamentos más importantes se reúnen con carácter casi permanente.

Está integrado por tres jueces de carrera: un presidente (presidente de sala o consejero del Tribunal de Apelación), dos asesores (consejeros del Tribunal de Apelación o magistrados del Tribunal de Primera Instancia del departamento en que se celebre la audiencia) y un jurado (seis ciudadanos elegidos por sorteo). También se reúne como

Tribunal de lo penal de menores con jurado cuando se trata de delitos cometidos por menores. En este caso, los asesores profesionales son jueces de menores.

En el caso de determinados delitos, como los de terrorismo, militares o de tráfico de drogas, la *Cour d'assises* está integrada exclusivamente por jueces de carrera.

El Ministerio Público está representado por un fiscal (*avocat général*).

## 2. Tribunales Correccionales (*Tribunaux correctionnels*)

Son competentes para juzgar los delitos, es decir, las infracciones castigadas con una pena de como máximo 10 años de privación de libertad o con una multa superior o igual a 3.750 euros. Están vinculados a los tribunales de primera instancia. En principio, están integrados por tres jueces de carrera, salvo en los casos legales de infracciones juzgadas por un juez único.

El Ministerio Público está representado por el fiscal o uno de sus sustitutos.

## 3. Juzgados de Paz (*Tribunaux de pólce*)

Son competentes para juzgar las infracciones de quinta clase. Tienen su sede en un tribunal de Primera Instancia e Instrucción. Están presididos por un juez de primera instancia, que actúa como juez único.

El Ministerio Público está representado por el fiscal o uno de sus sustitutos

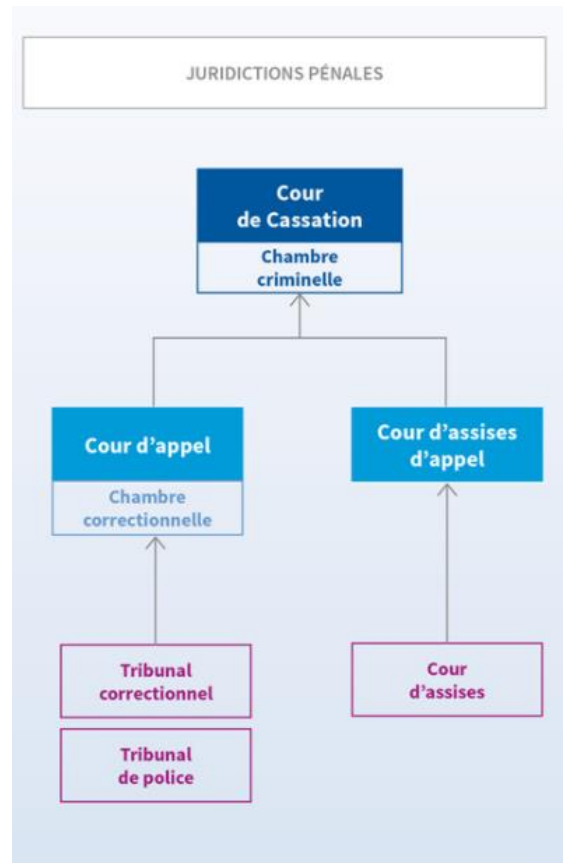
## 4. Juzgados de proximidad

Son competentes para juzgar las infracciones de las cuatro primeras clases. Tienen su sede en un Tribunal de Primera Instancia e Instrucción. Están presididos por un juez de proximidad, que actúa como juez único.

Las funciones del Ministerio Público suele ejercerlas un comisario de policía.

## 5. Órganos jurisdiccionales especializados

Existen asimismo órganos jurisdiccionales especializados en determinados litigios penales, como los tribunales marítimos mercantiles, que tienen competencia para juzgar determinados delitos marítimos. Hay 14 tribunales marítimos mercantiles.



**Figura 4.** Órganos que conforman el orden jurisdiccional penal francés.  
(Justice.gouv.fr, 2018)

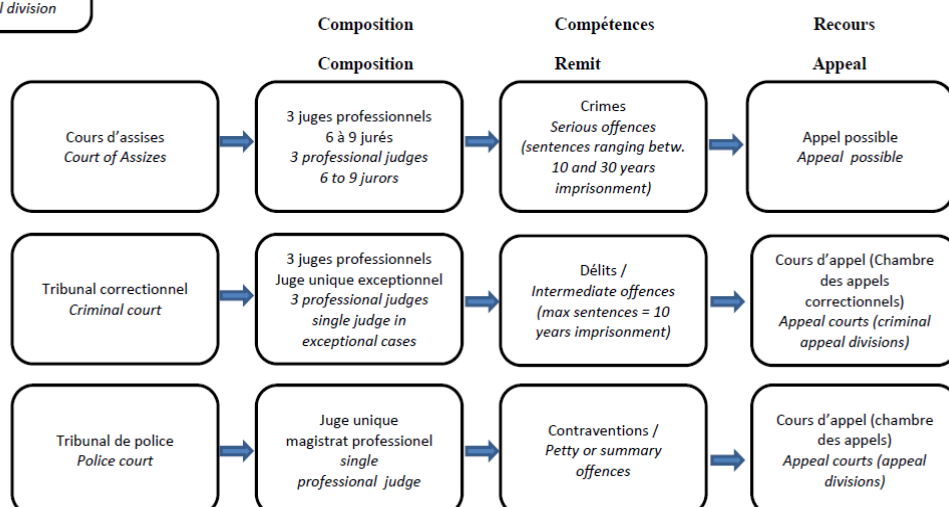
## Organisation juridictionnelle française

### *French Judicial System*

#### Juridictions répressives

#### *Criminal courts*

Cours de cassation/  
chambre criminelle  
Court of cassation/  
criminal division



**Figura 5.** Órganos que conforman el orden jurisdiccional penal francés.



### 5.3. Austria

Austria, en cuanto Estado federal (*Bundesstaat*, art. 2 Ley Constitucional Federal), es en principio uno de los sistemas clásicos en Europa, constituyendo un modelo federal simétrico y fuertemente centralizado. Los nueve *Länder* tienen autonomía constitucional, poder legislativo y funciones administrativas, pero carecen de poder judicial. A la Federación se le otorgan mayores poderes que a los Estados y además le corresponde una cierta supervisión de la legislación regional, pero la paridad entre Federación y Estados implica que el Derecho federal no se impone al estatal (Elías Méndez, s.f.).

La Constitución regula detalladamente (arts. 10-15) la distribución de competencias entre la Federación y los *Länder* mediante el método conocido en la doctrina germánica como “sistema dual de enumeración y competencia general”, por el cual todas las facultades de legislación y ejecución pertenecen a los *Länder*, y sólo las que se enumeran taxativamente corresponden a la Federación (art. 15.1 LCF).

En Austria, el poder judicial adquiere rasgos peculiares en el sistema constitucional del país, ya que viene regulado en el Título III de la Constitución austríaca y está incorporado en el ámbito de tratamiento de la función ejecutiva. Esto no debe sorprender si se considera que la actividad judicial se identifica con la ejecución del derecho, puesto que el carácter fundamental del juez es la independencia y la exclusiva sujeción a la ley. En consecuencia, en Austria se habla, sobre todo, de función judicial y no de poder judicial como ocurre en los ordenamientos jurídicos precedentes. Respecto al poder legislativo y ejecutivo, el judicial aparece como un poder unitario y centralizado, regulado por una ley federal, en la composición y funcionamiento de los tribunales, mientras que los jueces son nombrados por el presidente federal o en lugar suyo por el ministro federal (Elías Méndez, s.f.).

La jurisdicción ordinaria se distribuye entre la primera y la segunda instancia (apelación), y al final se encuentra el Tribunal Supremo –“*Oberster Gerichtshof*”– de última instancia, con función de nomofilaxis. En el plano de la justicia administrativa, se debe subrayar la diferencia entre Austria y el resto de los países occidentales, por la naturaleza de los jueces de lo contencioso, situados fuera del sistema judicial, puesto que son comisiones independientes. El Tribunal Supremo contencioso y el Tribunal Constitucional ocupan una posición particular.

La jurisdicción ordinaria se compone de juzgados, tribunales regionales de primera y segunda instancia, de tribunales de apelación y del Tribunal Supremo (TS) (*Oberster Gerichtshof*), que la culmina. El TS es la última instancia en las causas civiles y penales, correspondiéndole una función de unificación de la jurisprudencia (art. 92.1 LCF).

Por otra parte, la justicia administrativa, que se compone de órganos administrativos y del Tribunal Administrativo como última instancia, se encarga de dirimir cualquier conflicto entre una administración pública y un particular. Sus miembros son nombrados por el Presidente federal a propuesta del Gobierno federal.



**Figura 6.** Órganos jurisdiccionales austriacos según el ámbito territorial.  
(Justiz.gv.at, 2018)

### Orden jurisdiccional penal austriaco

En las principales ciudades austriacas también hay órganos jurisdiccionales especializados: 5 en Viena, competentes en materia civil, penal, mercantil (dos tribunales), laboral y social; y 2 en Graz, competentes en materia penal y en el resto de los asuntos.

Los órganos de la jurisdicción ordinaria se estructuran en cuatro niveles. Se encargan de dictar jurisprudencia los siguientes órganos jurisdiccionales:

- 116 tribunales de distrito (*Bezirksgerichte*),
- 20 audiencias regionales (*Landesgerichte*),
- 4 audiencias territoriales (*Oberlandesgerichte*) y
- El Tribunal Supremo

En primera instancia las causas se asignan a los tribunales de distrito o a las audiencias regionales. En materia penal las competencias se delimitan por la gravedad de la pena que se aplica a la infracción.

En el procedimiento penal se sigue una doble vía:

Contra las sentencias de los tribunales de distrito en primera instancia cabe presentar ante las audiencias regionales, que actúan en salas de recurso formadas por tres magistrados, dos tipos de recursos:

- Recurso de nulidad,
- Recurso contra el alcance de la culpa y los términos de la pena.

La audiencia territorial competente conoce del recurso en sala formada por tres magistrados.

Cuando actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia una audiencia regional constituida en juez único (en los casos de delitos y faltas condenados con una pena de privación de libertad de hasta 5 años, como los de falso testimonio en juicio), cabe presentar ante las audiencias territoriales dos tipos de recurso:

Cuando actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia una audiencia regional constituida en sala de jueces legos o con jurado, cabe recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo. En cambio, el recurso relativo únicamente a los términos de la pena debe presentarse ante las audiencias territoriales.

## 6. NORMATIVA PRE-DIRECTIVA DE CADA PAÍS

Las legislaciones nacionales anteriores a la transposición de la Directiva objeto de estudio no eran ajenas a la regulación del ejercicio de la traducción e interpretación en los procesos penales. No obstante, no en todos los ordenamientos jurídicos se incluían las mismas garantías que permitían al acusado o detenido comprender o hacerse entender a lo largo de todo el proceso penal.

En las tres normativas en las que centro el análisis, los intérpretes y traductores jurídicos eran considerados como personas que desempeñan el ejercicio de sus funciones en el sector de los servicios públicos y que asisten lingüísticamente a las partes intervinientes en los procesos penales (VV.AA., 2015: 271). Por su parte, Gascón Nasarre (2011: 32) define la figura de los intérpretes judiciales de la siguiente forma: «asisten en la tarea de la comunicación a la Administración de Justicia y a las diferentes partes que intervienen en un proceso judicial y constituyen el nexo de unión comunicativo entre el ciudadano, los abogados y, cómo no, los jueces». A esto, Hale (2010: 66) añade que la interpretación judicial comprende tres ámbitos jurídicos: interrogatorios policiales, entrevistas entre abogado y cliente y vistas en juzgados o tribunales. Esta diversidad de ámbitos está «al servicio del mismo sistema jurídico subyacente y comparte los mismos conceptos jurídicos y algunos de sus discursos» (Hale, 2010: 66).

Aun así, sobre todo en las legislaciones española y francesa, existían serias lagunas en la regulación de los elementos y condiciones fundamentales de la profesión, como la formación, las funciones, el perfil y el acceso a la misma.

### 6.1. España

Veamos primero el caso español. En la LECrim de 1882 ya se contenía en los artículos 440, 441 y 442 el derecho a la asistencia de interprete, aunque regulado de una forma obsoleta y bastante anacrónica. En lo que se refiere a la formación requerida para el desempeño de esta profesión en los procesos penales, resultaba revelador que no fuera un requisito *sine qua non* contar con una titulación universitaria en Traducción e Interpretación o en Lenguas Extranjeras. De hecho, en el momento en que se legisla esta cuestión no existía una titulación con esa denominación. Por eso, bastaba con acreditar un nivel más o menos alto de las lenguas de trabajo utilizadas en el proceso o, en aquellos

casos en los que se careciera de títulos o acreditaciones de nivel, se recurría a los denominados intérpretes naturales, esto es, aquellas personas que aun sin haber cursado una formación específica en la materia hablaban las dos lenguas requeridas.

En cuanto a las funciones de los intérpretes y traductores judiciales en los diferentes países objeto de estudio, estas no distaban mucho unas de otras. En muchas ocasiones, en la misma persona se agrupaba la figura del traductor y del intérprete, sin que se tuviera en cuenta que sus técnicas y métodos de trabajo son distintos. Por un lado, el traductor se enfrenta a la traducción de documentos oficiales de diversos registros lingüísticos y especialidades (jurídico, médico, general, etc.). En cambio, el intérprete tiene como principal tarea la de interpretar al acusado durante la detención y, posteriormente si procede, durante la vista del juicio.

De hecho, la forma de acceso a la profesión es el elemento comparativo en el que más diferencias encontramos. En España, la legislación que habla de la interpretación en este ámbito estaba conformada por los arts. 231.5 de la LOPJ y arts. 124-127 de la LECrim. Este ordenamiento jurídico incluía un sistema doble, ya que existían dos vías de acceso diferentes. Existía la figura del intérprete y/o traductor de plantilla que pertenece a la Administración de Justicia, puesto al que, se accede por concurso-oposición. Para poder presentarse a la oposición, la legislación no considera un requisito imprescindible estar en posesión del título de Licenciado en Traducción e Interpretación o Filología, sino que se puede acceder con otros títulos. Sin embargo, también podemos encontrar la figura del intérprete freelance, es decir, un profesional independiente que interviene en frecuentemente y trabaja para los organismos judiciales a través de una empresa que está licitada para prestar el servicio (Blasco Mayor y Pozo Triviño, 2014: 19). A esta complejidad se le añade la potencial heterogeneidad que deriva de la transferencia a las Comunidades Autónomas de competencias en materia de justicia. Con base en dicha delegación, podrían establecerse estatutos profesionales y requisitos de acceso a la profesión diferentes.

## **6.2. Francia**

En Francia, la Ley de 30 de noviembre de 1892 introdujo las primeras listas de peritos judiciales (Rojo Chacón, 2015: 100). Posteriormente, el papel de los traductores e intérpretes en los procesos penales quedó regulado en el *Code Pénal* y en el *Code de*

*Procédure Pénale*. Se estableció que podrán ejercer la profesión aquellas personas que se incluyan en las listas que obran en poder de las *Cour d'appel* (Tribunal de Apelación) y de la *Cour de cassation* (Tribunal de Casación). Además, en ninguno de estos casos era necesario superar ningún test o prueba de competencia profesional. Otra particularidad es que, al contrario que en otros Estados miembros de la Unión, el derecho a la asistencia de un intérprete en las entrevistas con el abogado no estaba contemplado en el *Code de procédure pénale* francés (Daoud y Rennuit-Alezra, 2013: 2).

Además, no todos los profesionales a los que se puede recurrir superan el mismo sistema de acceso. Los profesionales que forman parte de la lista de asilo y refugio no están sometidos a un examen colegiado de los magistrados. El sindicato considera que, a raíz de esto, habrá algunos sospechosos y acusados que cuenten con una protección superior a otros, ya que algunos traductores e intérpretes que les serán asignados contarán con una mayor formación y experiencia.

Por lo tanto, solicitan a la Comisión que interceda en la regulación y que se incluyan las siguientes enmiendas a la normativa francesa publicada el 27 de octubre de 2013: que se incluya necesariamente la independencia del registro elaborado por el Estado, que se determine qué titulación hay que tener para poder inscribirse, y, por último, que se establezca en la legislación francesa el nuevo derecho a la traducción y a la interpretación en los procesos penales como un derecho fundamental (Rojo Chacón, 2015: 8).

Ahora bien, no todos los Estados miembros han esperado a que una Directiva regulase esta profesión. Algunos ya contaban con una regulación previa, como Austria, caso al que nos referiremos para completar nuestro análisis. En este país, ya antes de la publicación de la directiva se contaba con un sistema de regulación de la profesión que reunía los principales requisitos de esta.

### **6.3. Austria**

En Austria, en el año 2009, el ordenamiento jurídico reguló el acceso a la profesión mediante la modificación de la *Bundesgesetz über die allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher* (Ley Federal relativa a los peritos e intérpretes judiciales) de 1975. En ella se establecieron una serie de requisitos: en primer lugar, se exigieron unas condiciones de formación que podían probarse mediante dos años de experiencia si se contaba con el título universitario de Traducción e Interpretación o cinco años de experiencia previa a la solicitud, si no se dispone del

mencionado título (Gascón Nasarre, 2013: 70). Además, ya en 1975, se establecieron unos requisitos de acceso, consistentes en la obtención de la calificación de apto en un examen oral que abarca conocimientos de derecho austriaco tanto material como procesal y que coordina un tribunal examinador compuesto por expertos independientes y cualificados de la Asociación Profesional de Intérpretes Judiciales. Por último, y como gran novedad respecto al resto de ordenamientos jurídicos europeos, también se estipularon condiciones de calidad, de modo que todo profesional que desee ejercer esta profesión debía contar con un seguro de responsabilidad civil de una cuantía mínima de 400.000 euros (Gascón Nasarre, 2013: 71).

Tal vez al no incluirse dentro de las exigencias desarrolladas por la Directiva, este último requisito de la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión no aparecía en el resto de Estados. Se puede considerar una salvaguarda del Estado frente a los posibles costes generados por errores u omisiones en la labor de estos profesionales y como una medida para garantizar la calidad *a priori*.

Por añadidura, cabe subrayar cómo Austria ha sabido resolver el problema de las lenguas minoritarias, cuyos profesionales en muchos casos no contaban con titulaciones expedidas por sus países de origen. Para ello, decidió incluir en su regulación la diferencia entre acceso mediante titulación y acceso por experiencia, para las que concretó requisitos temporales diferentes.

Por su parte, otros Estados miembros han optado, como indicó Rosa Lamana, representante del departamento el Ministerio de Justicia, por garantizar la calidad *a posteriori* “mediante un régimen de sanciones en caso de que las traducciones e interpretaciones se realicen incorrectamente y exista una denuncia o queja al respecto por parte de los operadores jurídicos” (VV.AA., 2014: 2). En el caso de España, se explicita que la denuncia ha de ser interpuesta por los actores jurídicos. La pregunta que surge es: ¿qué sucede con los sospechosos, investigados o encausados que no están conformes con la interpretación o la traducción? En la regulación se establece que los acusados no pueden reclamar, sino que, en todo caso, quien tiene la función de impugnar decisiones o protestar por determinadas actuaciones si se considera que perjudican a su defendido es el abogado. ¿No resulta contradictorio establecer esta garantía procesal para los afectados por un proceso penal para luego privarles de su derecho a reclamar?

| LEGISLACIÓN PRE-DIRECTIVA   |   |   |
|---|---|---|
| ESPAÑA  | FRANCIA   | AUSTRIA   |
| <p>Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882)</p> <p>(Arts. 440, 441, 442)</p> | <p><i>Code de Procédure Pénale</i> (1959)</p> <p>(Arts. preliminar y 803-5)</p> | <p><i>Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher</i> (1975)</p> <p>+</p> <p>(Modificación 2009)</p> <p>+</p> <p><i>Bundesgesetz vom 19.2.1975 über die Gebühren der Zeugen und Zeuginnen, Sachverständigen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen, Geschworenen, Schöffen und Schöffinnen</i></p> |

**Figura 7.** Cuadro comparativo de la legislación pre-directiva. Elaboración propia.

## 7. NORMATIVA POST-DIRECTIVA EN CADA PAÍS

Los aspectos en los que me gustaría centrarme a la hora de realizar el análisis comparativo entre los tres ordenamientos en cuanto a la transposición la Directiva 2010/64/UE son los siguientes:

1.º La creación de un Registro de traductores e intérpretes cualificados para trabajar en la Administración de Justicia, lo que conlleva que cada Estado tenga competencia para establecer los criterios de ingreso en dicho registro.

2.º Control de acceso a la profesión y verificación de competencia personal.



Como ya hemos mencionado con anterioridad, la Unión Europea, en el articulado de la Directiva 2010/64/UE, refuerza el derecho a la traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua empleada en el proceso penal dentro de cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Para ello introduce una serie de novedades en la regulación de estas profesiones que servirán de punto de partida para los legisladores de los ordenamientos internos.

Para empezar, se extrae del cuerpo de esta Directiva que la Comisión Europea pretendía que los Estados miembros establecieran unos criterios propios de mérito y capacidad para poder formar parte de la lista de profesionales, tal y como se desprende del primer párrafo del artículo 5 de la misma: «Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida con arreglo al artículo 2, apartado 8, y el artículo 3, apartado 9» (Directiva 2010/64/UE, art. 5.1). Asimismo, se establece la diferencia entre las dos ramas profesionales implicadas: la traducción y la interpretación derivada del análisis de los artículos 2 y 3 relativos al derecho a la interpretación y el derecho a la traducción de documentos esenciales respectivamente:

#### Artículo 2: Derecho a interpretación:

Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

#### Artículo 3: Derecho a la traducción de documentos oficiales:

Los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que estén condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.

En cada uno de los párrafos que contiene cada artículo se establece el momento en el que el acusado o sospechoso podrá beneficiarse de los servicios prestados por los profesionales, si bien, la directiva no cuenta con una especificación clara de las funciones

de los traductores e intérpretes La razón reside en que la finalidad de la Directiva consiste en establecer un marco de mínimos para regular garantías procesales en lo referente a la tutela judicial efectiva cuando el acusado no hable la lengua del procedimiento, pero deja a cada Estado la libertad de decidir de qué manera adaptará a la Directiva su ordenamiento jurídico nacional. La Directiva no prescribe en ese sentido unas competencias que sean idénticas para todos porque ha de permitir también que cada país adapte la norma de acuerdo con su ordenamiento jurídico propio y con las especificidades de sus instituciones.

En último lugar, otro aspecto novedoso que nos proporciona la directiva es el artículo 6, dedicado a la formación del resto de especialistas de la justicia que deberán aprender a trabajar con los intérpretes judiciales. De ese modo, se pretende crear un vínculo profesional más estrecho entre los profesionales para que se garantice una comunicación eficaz y efectiva.

#### Artículo 6: Formación

Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros solicitarán a los responsables de la formación de los jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales el que presten una atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de manera que se garantice una comunicación efectiva y eficaz.

#### **7.1. España**

En lo que respecta a España, uno de los países objeto de estudio, la transposición de la directiva ha sido bastante tardía. Es más, el pasado mes de mayo de 2014 la Comisión Europea envió un dictamen motivado al Gobierno español por no haber tomado las medidas oportunas para la aplicación de la misma, cuyo plazo de transposición venció el 27 de octubre de 2013 (Comisión Europea, nota informativa, 2014). Aun así, ha habido que esperar hasta el 5 de septiembre de 2014 para la publicación del proyecto de ley mediante el cual se procedía a la transposición conjunta de la Directiva 2010/64/UE y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales y se modifica el articulado de la LECrim. Finalmente, la Directiva se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 5/2015, de

27 de abril, por la que se modifican la LECrim y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

La primera directiva es fundamental para la regulación de esta garantía procesal en España, ya que hasta ese momento no existía ninguna normativa que regulara el acceso profesión en el ámbito judicial. No obstante, si analizamos el contenido de la directiva, vemos cómo la creación de un registro de profesionales debidamente cualificados (Directiva 2010/64/UE, art. 5.2) se contempla en la disposición adicional única y cómo el legislador concede el plazo de un año, desde la publicación de la misma, para establecer su norma reguladora.

Si realizamos un análisis comparado de la nueva redacción del artículo 124 de la LECrim con la Disposición Adicional Única, observamos que al registro se le atribuyen dos denominaciones diferentes: a veces se habla de registro y a veces de listado, lo que puede inducir a error (Rojo Chacón, 2015: 103).

Así, en el art. 124 de la LECrim se establece que «El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que se hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración competente [...]», mientras que la Disposición final primera contiene que: «El Gobierno presentará, en el plazo máximo de un año desde la publicación de esta Ley, un Proyecto de ley de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar las listas de traductores e intérpretes a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

La intervención del interprete debiera tener lugar en las diligencias policiales (detención, lectura de derechos, toma de declaraciones, interrogatorios, etc.), exámenes médicos en los Institutos de Medicina Legal a cargo de los médicos forenses, denuncias en los Juzgados de guardia, instrucción del caso en los Juzgados de instrucción, vistas orales intermedias, entrevistas entre sospechoso o acusado y su abogado para preparar la defensa, juicios (escrito de acusación, intervenciones de las partes, informes periciales, traducción a vista de documentos, entre otros) y la lecturas en audiencia pública de sentencias (VV.AA., 2015: 255).

Además, cabe destacar de este artículo la regulación en los casos de urgencia de traductores e intérpretes ajenos al registro, siempre que se demuestre que poseen conocimientos de las lenguas de trabajo y que están capacitados para el ejercicio de la interpretación. Como ya hemos visto con anterioridad, esta medida incorporada dentro del articulado de la LECrim colapsa con las normas de calidad impuestas por la Directiva 2010/64/UE, ya que, en este caso, se estaría creando una situación de discriminación para con los profesionales que hayan tenido que someterse al proceso de inscripción en el registro y un agravio comparativo para el sospechoso o acusado que tiene que verse interpretado o traducido por un profesional al que ni siquiera se le exige contar con un título superior en Traducción e Interpretación o Lenguas Extranjeras. No obstante, cabe señalar que esta medida es de rango excepcional y está prevista para casos de urgencia.

Además, tampoco habría sido necesario incluir la regulación del intérprete eventual ya que en la nueva redacción del artículo 123 de la LECrim se contempla la posibilidad de realizar la interpretación por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación cuando no se pueda contar con la presencia en sala del intérprete. De esta manera, la solución contenida en este precepto podría cubrir posibles lagunas y debería ser preferente a la del intérprete o traductor *ad hoc*, ajeno al registro. No obstante, quizá no todas las sedes judiciales o policiales estarán dotadas de las instalaciones necesarias. Al menos no las más antiguas, dados los medios obsoletos que se manejan en muchos juzgados.

Explicado en otras palabras, podría decirse que del mismo modo que la ley no permite que una persona que no cuente con la Licenciatura o Grado en Derecho y no esté colegiada pueda ejercer de abogado ante cualquier juzgado o tribunal, no deberíamos permitir que personas sin técnicas de traducción e interpretación y sin conocimiento de la terminología jurídica se hicieran cargo de la comunicación en este contexto.

Según el art. 5.2 de la Directiva 2010/64/UE, «los Estados miembros se esforzarán por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados». El Estado español ha tenido tiempo desde la publicación de la directiva, en el 2010, para gestar el proyecto y, a fecha de hoy, se sigue esperando la llegada del registro. En la LO 5/2015, se fijaba el 28 de abril de 2016 como plazo máximo para presentar un proyecto de ley, que aún no se ha publicado. Tampoco esta ley supondrá la implantación real del registro, ya que, tras su aprobación, se tendrá que desarrollar

reglamentariamente. En otras palabras, en el año 2010, la Directiva 2010/64/UE obligaba a los Estados miembros a tenerlo todo listo antes del 27 de octubre de 2013. El Estado español no actuó hasta el 2015 —cinco años después de la publicación de la directiva y dos años después de que finalizara el plazo para transponerla— y ni siquiera cumplió con todo lo dispuesto en la norma europea.

En Cataluña, la situación es distinta, ya que antes de que estuviera lista la LO 5/2015 española, las autoridades catalanas decidieron aprobar la creación de un registro de traductores e intérpretes propio (Sancho Durán, 2017). De este modo, el 24 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el Decreto Ley 8/2014 por el que se crea el Registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña. En su preámbulo, la Generalitat argumenta que el Estado español ha dejado transcurrir el plazo de la Directiva 2010/64/UE sin transponerla y que, consecuentemente es necesario introducir con urgencia una regulación que cumpla con lo exigido en ella. Asimismo, señala que la Comisión Europea ya ha contactado con España para abrir un expediente de incumplimiento por ese motivo y que corresponde a las Comunidades Autónomas con competencias en la materia crear y regular, en su ámbito territorial, los registros de traductores e intérpretes y establecer los requisitos que estimen convenientes.

A diferencia de la LO 5/2015 estatal, la norma catalana hace referencia inequívocamente a «un sistema de información que posibilite el acceso a la base de datos donde permanezcan los datos actualizados de los traductores e intérpretes que se hayan inscrito al Registro» (art. 2 DL 8/2014). Las autoridades catalanas son menos ambiguas respecto a la necesidad de crear un auténtico registro que vaya mucho más allá del listado del MAEC de traductores-intérpretes jurados, que no contiene necesariamente a profesionales que están en activo.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de actualizar los datos «con la periodicidad que se establezca» (art. 5 del DL 8/2014). Si el registro se utiliza como herramienta directa para contratar a traductores e intérpretes, los profesionales que se inscriban deben estar dispuestos a trabajar para los tribunales. En la práctica, un registro ineficaz —una «lista»— es una apuesta por las licitaciones, ya que solo servirá para verificar si los profesionales seleccionados por un tercero figuran en él.

No obstante, y dejando a un lado la normativa de Cataluña, como ya denunciaba la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), la técnica imperante de la subcontratación por personas jurídicas ha ocasionado un círculo vicioso de falta de calidad de los profesionales y precariedad laboral, debido a la reducción de las tarifas que se ha producido en los últimos años. Hoy día, las administraciones prefieren optar en las licitaciones por la propuesta más ventajosa económicamente, sin tener en cuenta que mediante este mecanismo están provocando consecuencias nefastas en la profesión tales como precariedad laboral y una falta de reconocimiento del ejercicio de la interpretación, tal y como existía en la situación pre-directiva en España.

Esta falta de interés o de reconocimiento de esta profesión por parte de las administraciones afecta de manera directa a la ciudadanía, tanto nacional como extranjera, pues las administraciones no están en condiciones de garantizar el ejercicio efectivo de uno de los principales derechos fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello resulta imprescindible que las administraciones se hagan cargo del acceso a la profesión y de la gestión de la misma de manera directa sin la intermediación de terceros, para garantizar la calidad. Basta recordar que, en mayor o en menor medida, el Estado podría llegar a ser responsable subsidiario por la violación de los derechos y las garantías procesales de los sospechosos y acusados.

Por último, cabe indicar que se hace patente una falta de asesoramiento y de conocimiento a la hora de redactar esta ley. Sobre todo, en lo que concierne a la nueva redacción del artículo 123 de la LECrim, donde se observa el establecimiento de la interpretación simultánea como técnica principal y la interpretación consecutiva como técnica subsidiaria. Asimismo, en las intervenciones monológicas, como la lectura del escrito de acusación, el intérprete deberá realizar una interpretación simultánea susurrada al sospechoso o acusado. En otras ocasiones, en caso de que se presenten documentos durante el juicio, se debe facilitar una copia al intérprete para que lo traduzca oralmente al sospechoso o acusado, modalidad denominada traducción a la vista (VV.AA., 2015: 264). Es necesario recordar que para poder llevar a cabo una interpretación simultánea eficaz es necesario contar con unas infraestructuras determinadas, como son las cabinas de interpretación, bastante costosas y de difícil implantación en todas las salas de juicio y comisarías. Por el contrario, la interpretación consecutiva está acompañada de la toma de notas en la mayoría de las ocasiones y es una técnica mucho más lenta, ya que la

interpretación se apoya en la memoria a corto plazo y en las anotaciones, lo que genera un alargamiento del proceso si se opta por este tipo de interpretación en lugar de por la simultánea, por ejemplo. Se pueden utilizar ambas según la situación de que se trate (monológica o dialógica) minimizando considerablemente la interferencia.

Por ende, se requiere una combinación de técnicas que se adapte a cada situación comunicativa y a los medios de los que dispone la sede judicial. De todos modos, en la mayoría de las ocasiones, la técnica interpretativa preferible para estos casos sería la interpretación bilateral o de enlace, pues después de cada intervención de las partes, el intérprete transmitirá lo dicho en la otra lengua. Por lo tanto, nos encontramos ante la figura de un intérprete judicial que debe dominar la terminología jurídica en dos lenguas, ya que tiene que cambiar de una a otra durante todo el proceso. Además, si está previsto que se lea un informe pericial que contiene numerosas especificaciones en un lenguaje técnico, éste se debe proporcionar al intérprete con antelación para que pueda documentarse (VV.AA., 2015: 265).

En definitiva, a pesar de algunas deficiencias, las reformas introducidas por la LO 5/2015 evidencian un progreso respecto a la legislación nacional previa del art. 441 LECrim, que era insuficiente y anacrónica. Se regula con mayor rigor el derecho a la interpretación y, por primera vez en España, se reconoce expresamente el derecho a la traducción. Pero todavía queda mucho trecho por recorrer.

## **7.2. Francia**

La transposición de la Directiva 2010/64/UE se ha realizado en Francia a partir del *Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction*<sup>1</sup> (Heder, 2015). Ha de señalarse que, con anterioridad a la Directiva, el ordenamiento jurídico francés ya contaba con un sistema de registro de peritos judiciales entre los que figuraban los traductores e intérpretes de los procesos penales y ha decidido mantener este sistema. Por lo tanto, los profesionales interesados en la traducción e interpretación judicial podían inscribirse tanto en la lista nacional, la de la *Cour de cassation*, como en las diferentes listas que obran en poder de las *Cours*

---

<sup>1</sup> Decreto n° 2013-958 de 25 de octubre de 2013 sobre la aplicación de las disposiciones del artículo preliminar y del artículo 803-5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal francesa relativos al derecho a la interpretación y a la traducción. [Traducción propia].

*d'appel*, en la actualidad 36 tribunales repartidos por todo el territorio nacional, incluidos los territorios de ultramar. Por tanto, es importante resaltar que la inscripción en la lista significa estar disponible para ejercer ambas funciones: traducir e interpretar.

Para poder inscribirse en las listas provinciales de las *Cours d'appel* es necesario presentar una solicitud en la sede territorial para la que se vaya a interpretar y traducir. La inscripción adopta la forma de un régimen probatorio de dos años de duración, al término del cual se evalúa la experiencia del profesional y la adquisición de conocimientos jurídicos necesarios para el buen desempeño de la misión, con vistas a una posible reinscripción, previa solicitud por parte del profesional interesado. Si el dictamen de la comisión integrada por magistrados y peritos es favorable, se procede a realizar una inscripción por un periodo de cinco años.

Además, en lo que respecta a la lista nacional, sólo pueden inscribirse en ella los peritos que hayan estado inscritos en las de las *Cours d'appel* durante al menos tres años. El Fiscal General de la *Cour de cassation* analiza las solicitudes, pide dictamen al Presidente Primero y al Fiscal General de la *Cour d'appel* en la que estuvo inscrito el interesado y elabora la lista nacional.

Las condiciones establecidas para poder inscribirse en cualquiera de las dos listas son distintas según se trate de una persona física o jurídica. Para las primeras, es necesario ejercer o haber ejercido una profesión o actividad relacionada con esta especialidad, tener menos de 70 años de edad y ejercer la actividad profesional en el ámbito de competencia territorial de la *Cour d'appel* en la que se inscriba. Para las personas jurídicas bastará con disponer de medios técnicos y personal cualificado para el desempeño de la profesión. Además, **en ningún momento el legislador francés hace referencia a que haya que contar con una titulación específica para poder inscribirse**. Aunque la directiva resulte ambigua y poco precisa a la hora de exigir tan solo que los traductores e intérpretes estén “debidamente cualificados”, cabría esperar que los legisladores nacionales detallasen y especificasen este requisito en el proceso de transposición, más aun teniendo en cuenta que existe formación universitaria y reglada en esta materia.

Asimismo, la normativa francesa ofrece dos opciones más: 1) que la autoridad judicial competente seleccione a uno de los profesionales inscritos en la lista que obra en poder de las instituciones encargadas del asilo y refugio o 2) que encargue los servicios a



cualquier persona ajena a las listas anteriormente mencionadas siempre y cuando sea mayor de dieciocho años. Comprobamos cómo la normativa ofrece la posibilidad de ejercer esta profesión sin estar registrado. La regulación francesa establece, por tanto, que los jueces son libres para elegir un profesional ajeno a las listas mediante una resolución motivada en el ámbito penal. Sin embargo, esta regulación no parece justificada si tenemos en cuenta que la nueva redacción del *Code de procédure pénale* establece la posibilidad de la interpretación por medios telemáticos en aquellos casos en los que el intérprete no puede estar presente en la sala de vistas.

Por lo tanto, si un profesional que forma parte de las listas de profesionales acreditados de otras *Cours d'appel* se hiciera cargo de esa interpretación, sin duda, se garantizaría una mayor calidad que designando a un intérprete o traductor *ad hoc*. Asimismo, cabe destacar que en ningún momento se hace referencia ni al perfil de los profesionales ni a su titulación. Sin embargo, estas no son las únicas insuficiencias que se le pueden achacar a la transposición de la directiva en Francia. Por su parte, el *Syndicat national de traducteurs professionnels* (Sindicato Nacional de Traductores Profesionales) de Francia ha remitido a la Comisión Europea una serie de observaciones respecto de la transposición de la directiva (*Syndicat National des Traducteurs*, 2013). Estas indicaciones giran en torno a lo que consideran una regulación escasa del artículo 5 de la directiva que trata sobre la implementación de un registro de profesionales debidamente cualificados.

El sindicato francés alega que en la regulación no se hace referencia alguna a la titulación necesaria para la inscripción en las listas, y que el órgano encargado de la selección es jurisdiccional y no estatal, lo que produce una falta de independencia. Igualmente, no todos los profesionales a los que se puede recurrir superan el mismo sistema de acceso. Los profesionales que forman parte de la lista de asilo y refugio no están sometidos a un examen colegiado de los magistrados y, por ello, el sindicato considera que, a raíz de esto, habrá algunos sospechosos y acusados que cuenten con una protección superior a otros, ya que algunos traductores e intérpretes que les serán asignados contarán con una mayor formación y experiencia.

La *Commission des Lois* no solo modifica el texto del artículo que propone el Proyecto de Ley, sino que lo cambia de ubicación dentro del *Code de Procédure Pénale*, dándole mayor preeminencia al colocarlo dentro del artículo preliminar, que por tanto

informa todo el *Code* y no sólo como un artículo más dentro del mismo. El derecho a la traducción y a la interpretación, como garantía procesal del derecho a un juicio justo, garantizado por el artículo 6 del *Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales*, encuentra aquí su sitio natural.

La redacción adoptada por la *Commission des Lois* completa de esta manera el artículo 10-2 del *Code de Procédure Pénale* con un párrafo que reza: « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : [...] 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits »<sup>2</sup>. Asimismo, el artículo 10-3 regula : « Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code»<sup>3</sup>.

Asimismo, el artículo preliminar del *Code de Procédure Pénale* dispone lo siguiente:

« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code»<sup>4</sup>.

La Ley nº 2013-711 de 5 de agosto de 2013 ha sido la encargada de transponer la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de octubre de 2010,

---

<sup>2</sup> Los oficiales y agentes de policía judicial informarán por todos los medios a las víctimas de su derecho a [...] 7° Para las víctimas que no entendieran la lengua francesa, la posibilidad de beneficiarse de un intérprete y una traducción de las informaciones indispensables en el ejercicio de sus derechos. [Traducción propia].

<sup>3</sup> Si la persona no entendiera la lengua francesa tiene derecho, mediante previa solicitud, a la asistencia de un intérprete y a la traducción en una lengua que comprenda de las informaciones que son indispensables para el ejercicio de sus derechos y que le son, como tal, remitidas o notificadas en aplicación de la presente ley. [Traducción propia].

<sup>4</sup> Toda persona acusada o sospechosa que no entienda la lengua francesa tiene el derecho, en una lengua que comprenda y hasta el término del proceso, a la asistencia de un intérprete y a la traducción de los documentos esenciales para el ejercicio de su defensa y para la garantía de equidad del proceso que deberán a este efecto serle remitidos o notificados en aplicación de la presente ley. [Traducción propia].

relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los juicios penales. El legislador francés ha establecido un esquema general del ejercicio de este derecho para toda persona que manifieste la incompreensión de la lengua francesa en razón de su sordera o su condición como extranjero.

La ley, además, introduce un nuevo artículo 803-5 de la LECrim francesa, en virtud de la cual se establece que:

« S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code<sup>5</sup>.

El decreto nº 2013-958, de 25 de octubre de 2013 ha precisado las concretas modalidades del ejercicio de este derecho en los nuevos artículos 594 a 594.11 de la LECrim francesa.

En lo que concierne al derecho a la interpretación, el derecho puede ser solicitado por el propio acusado o su abogado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, intervendrá el juez de oficio. Tal y como precisa el art. 594.5 de la Ley, el derecho también se aplica a las personas que presenten dificultades de expresión oral o de audición. Solo se aplica a las personas “acusadas o sospechosas” dentro del marco de un proceso penal, o a las personas sujetas a una orden de detención europea.

El derecho a la interpretación, recogido en los artículos 62, 63.1, 102, 114, 121, 279, 344, 393, 407, 535, 695.27, 695.30 y 706.71 de la LECrim francesa, recoge como principal innovación el derecho de la persona a beneficiarse de la asistencia gratuita de un intérprete a lo largo de las entrevistas con su abogado.

Garantizado por el artículo preliminar, este derecho está limitado, no obstante, exclusivamente a las entrevistas que resulten necesarias con un abogado y que estén

---

<sup>5</sup> Si hay dudas sobre la capacidad de la persona sospechosa o acusada para comprender la lengua francesa, la autoridad que le tome declaración o ante quien comparece verificará si esa persona entiende y habla el idioma. Excepcionalmente, se puede realizar traducción oral o un resumen oral de los documentos esenciales que deben remitirse o notificarse en aplicación de la presente Ley. [Traducción propia].

destinadas a la preparación de la defensa del acusado, antes de un interrogatorio o una audiencia.

### 7.3. Austria

La transposición de la Directiva en Austria se presenta como un caso satisfactorio debido a que “la gestión de los servicios de traducción e interpretación en este país se ha encomendado a la *Justizbetreuungsagentur* (JBA) o Agencia de Asistencia Judicial” (VV.AA., 2013: 2). El artículo 56 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal austríaca (*Strafprozeßordnung*) de 1975 ya contenía la regulación del derecho a la traducción y a la interpretación introducido por el título “*Übersetzungshilfe*” (ayuda de traducción).

- (1) Ein Beschuldiger, der die Verfahrenssprache nicht spricht oder versteht, hat das Recht auf Dolmetschleistungen (Abs. 2). Soweit dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und eines fairen Verfahrens erforderlich ist, hat der Beschuldigte darüber hinaus das Recht auf schriftliche Übersetzung der wesentlichen Aktenstücke (Abs. 3), die innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist vorzunehmen ist. Für das Verfahren zur Geltendmachung dieses Rechts gilt § 53 Abs. 1 erster Satz sinngemäß<sup>6</sup>.

Al igual que en los casos español y francés, se establece en el primer párrafo del artículo que el acusado que no hable o no entienda la lengua empleada durante el proceso tiene derecho a ser asistido por un intérprete, así como el derecho a la traducción de documentos escritos contenidos dentro del proceso.

La Ley Federal de Expertos e Intérpretes Judiciales Jurados y Certificados de 1975 austríaca (SDG – *Bundesgesetz über die allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetschen* 1975, I 2009/30) recoge los requisitos para el registro en la Lista de Intérpretes Judiciales y Jurados (VV.AA., 2012: 3). De esta manera, los solicitantes que deseen formar parte de este registro deben demostrar una experiencia profesional previa como intérpretes y/o traductores. Específicamente, los graduados universitarios en Traducción e Interpretación deben facilitar un documento certificado en el que se indique que han trabajado un mínimo de dos años de experiencia laboral como

---

<sup>6</sup> Una persona inculpada que no habla o no entiende la lengua del procedimiento tiene derecho a los servicios de interpretación. Si fuera necesario, con la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y para que tenga lugar un juicio equitativo, además, el inculcado tiene derecho a una traducción por escrito de los documentos principales. La traducción se efectuará en un plazo razonable. Asimismo, resulta de aplicación el párrafo primero del artículo 53 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal austríaca. [Traducción propia].

intérpretes y, para el resto de solicitantes, un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al registro.

La solicitud debe presentarse ante el tribunal de primera instancia en el distrito de residencia habitual del solicitante o lugar de interés profesional. En el transcurso del procedimiento de registro, el presidente responsable del registro (autoridad de certificación) se encargará de cobrar una comisión y preparará una opinión experta sobre si los requisitos para el registro se han cumplido. La tarifa de examen es de 400 euros (Gascón Nasarre, 2013: 70). Cuando se necesitara a más de tres examinadores, el coste del examen ascendería a 100 euros adicionales por examinador.

Es aconsejable haber preparado estas pruebas con anterioridad a la solicitud. En general y, dependiendo de su formación académica, se necesitarán al menos 6 meses para adquirir el conocimiento necesario.

El trabajo del intérprete judicial no solo exige un dominio impecable de la lengua extranjera, sino que también requiere el conocimiento de los principios procedimentales, legales y judiciales de Austria y de los procedimientos legales y judiciales del país. Asimismo, es imprescindible un amplio conocimiento de la terminología legal y comercial de la ley y el comercio, tanto en alemán como en el idioma extranjero. No obstante, también es necesario un conocimiento profundo de la terminología de otros campos, como medicina, tecnología, etc.

La traducción y la interpretación deben dominarse tanto del alemán al idioma extranjero como del idioma extranjero al alemán, es decir, no solo se realizará una interpretación directa desde la lengua A hacia la lengua B, sino que en muchas otras ocasiones la interpretación podrá ser de carácter bilateral. Una restricción para trabajar solo en una dirección no es posible.

En lo que se refiere a la expresión escrita, un dominio impecable de la gramática, la sintaxis y la ortografía del idioma alemán y de la lengua extranjera son condiciones básicas. La diligencia extrema, así como la precisión de la traducción cobran gran importancia dentro del tribunal. Si las traducciones certificadas son incorrectas, se puede presentar una demanda por daños y perjuicios. Estas acciones por traducciones deficientes deberán interponerse contra las personas que han producido dichas traducciones.

Otro de los prerequisites para ser intérprete judicial es la flexibilidad y el ingenio. A veces, tendrá que leer y explicar conceptos complicados en lenguaje sencillo, o dominar la jerga, la lengua vernácula y el argot.

Además, todos los años el presidente responsable del registro que se encarga de la selección de candidatos a intérpretes organiza varios seminarios introductorios de un día para los solicitantes. En ellos, un abogado explica los requisitos básicos necesarios cuando se trabaja como intérprete judicial. Además, las habilidades de interpretación y traducción se enseñan en seminarios básicos y más avanzados, ya que no solo basta con entender los términos individualmente, sino que es extremadamente importante entender en qué contexto se insertan. Por ello, es recomendable la lectura de diferentes textos legales, no solo en la lengua oficial del tribunal (alemán), sino también en las lenguas de trabajo (estatutos, tratados bilaterales, leyes, etc.).

Tal y como puede apreciarse, la página oficial de la Asociación de Intérpretes Judiciales de Austria establece una serie de requisitos muy específicos para los solicitantes. Asimismo, la página de la Asociación también ofrece información sobre el código ético que implica el ejercicio de esta profesión junto a las previsiones generales y especiales de los intérpretes judiciales.

Asimismo, la jurisprudencia del TEDH, concretamente en la sentencia del caso Kamasinski contra Austria, de 19 de diciembre de 1989, basada en el artículo 43 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, establece que la asistencia prestada en materia de interpretación debe ser de un nivel suficiente para permitir al acusado conocer de qué se le acusa y poder defenderse.

Recapitulando todo lo visto en los párrafos anteriores, se recoge una tabla con los respectivos medios de transposición de la Directiva 2010/64/UE de cada uno de los ordenamientos jurídicos objeto de análisis:

| <b>LEGISLACIÓN POST-DIRECTIVA</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <b>ESPAÑA</b>   | <b>FRANCIA</b>  | <b>AUSTRIA</b>   |
| Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. | <i>Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction.</i> | Modificación en 2009 de la <i>Bundesgesetz über die allgemein beeidigten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher</i> . |

**Figura 8.** Cuadro comparativo transposición de la Directiva 2010/64/UE. Elaboración propia.

## 8. JURISPRUDENCIA

En este apartado, quisiera realizar un barrido cuantitativo de las sentencias que han sido emitidas por los órganos jurisdiccionales pertenecientes al orden penal en cada uno de los ordenamientos jurídicos que son objeto de estudio en materia de defectos en los servicios de traducción e interpretación ofrecidos a lo largo de un procedimiento de carácter penal. Para ello, en primer lugar, seleccioné los buscadores jurisprudenciales en la página oficial del Ministerio de Justicia de cada Estado. Decidí que mi búsqueda abarcara un periodo a partir del cual ya se hubiera transpuesto la Directiva en los tres ordenamientos. Por tanto, dado que el Estado español fue el último en transponerla, inicié

la búsqueda desde el momento de su transposición, es decir, desde abril de 2015 hasta abril 2018.

### **8.1. España**

En España acudí a la página del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y encontré varias sentencias de distintas clases. Decidí agruparlas en tres categorías y ordenarlas cronológicamente de más antigua a más reciente.

En esta primera clasificación se alega la indefensión de los acusados por la falta de asistencia de intérprete o falta de calidad en las traducciones e interpretaciones ofrecidas por el intérprete en sala:

- STS 2653/2017, de 29 de junio de 2017
- SAP PO 1683/2017, de 18 de julio de 2017
- SAP MA 2280/2017, de 11 de julio de 2017
- STS 3617/2017, de 11 de octubre de 2017
- SAP VI 775/2017, de 26 de octubre de 2017
- STS 4310/2017, de 6 de noviembre de 2017
- STS 4859/2017, de 11 de diciembre de 2017
- SAP IB 2268/2017, de 21 de diciembre de 2017
- SAP IB 66/2018, de 18 de enero de 2018
- SAN 5/2018, de 24 de enero de 2018
- STSJ M 816/2018, de 13 de febrero de 2018
- AAP V 279/2018, de 14 de marzo de 2018
- STS 1011/2018, de 20 de marzo de 2018

En otras sentencias se alegan cuestiones procedimentales relativas a la traducción e interpretación en juicio, por ejemplo, la notificación del fallo al acusado tras la correspondiente traducción de la sentencia:

- STS 3173/2017, de 22 de junio de 2017
- AAP V 2386/2017, de 26 de junio de 2017
- SAP TF 1312/2017, de 29 de junio de 2017
- SAP VA 889/2017, de 11 de julio de 2017



- SAP M 10697/2017, de 18 de julio de 2017
- AAPP B 9093/2017, de 10 de noviembre de 2017
- SAP A 3282/2017, de 20 de noviembre de 2017
- ATS 12639/2017, de 23 de noviembre de 2017
- SAP IB 2255/2017, de 19 de diciembre de 2017
- SAP SS 1044/2017, de 20 de diciembre de 2017
- SAP A 3289/2017, de 28 de diciembre de 2017
- SAP M 304/2018, de 9 de enero de 2018
- AAP B 1249/2018, de 22 de enero de 2018
- SAP SA 61/2018, de 30 de enero de 2018

Además, también se da el caso de sentencias en las que la parte recurrente interpone un recurso de apelación basándose en el quebrantamiento de normas y garantías procesales, así como el derecho a la traducción e interpretación reconocidos en el art. 123 LECrim y que han causado indefensión a la parte denunciada:

- AAP B 5192/2017, de 29 de julio de 2017
- SAP B 10503/2017, de 7 de septiembre de 2017

## **8.2. Francia**

Veamos ahora la situación en Francia. Para ello, realicé mi búsqueda en el buscador jurisprudencial de *Legifrance*. Si realizamos la misma calificación por temática de la sentencia, en primer lugar, nos encontramos con aquellas emitidas en las que se alega la indefensión por parte de los acusados al no verse beneficiados de la asistencia de un intérprete o de la traducción de documentos relevantes durante el procedimiento penal:

- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.274, Inédit
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-82.894, Inédit

También encontramos sentencias que tienen que ver con cuestiones puramente procedimentales:

- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-85.194, Inédit
- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-85.195, Inédit

Aquellas en las que se interpone recurso solicitando la traducción de determinados documentos:

- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 15-84.012, Publié au bulletin

### **8.3. Austria**

En lo referente al caso austriaco, realicé la búsqueda en la base de datos de información sobre el sistema legal de la República de Austria, que contiene numerosa legislación y jurisprudencia de sus órganos jurisdiccionales. Las sentencias que hacen alusión a la falta de calidad o deficiencias en la traducción o interpretación proporcionadas son las siguientes:

- Gericht OGH, Geschäftszahl 15Os132/15y, Entscheidungsdatum 09.12.2015
- Gericht OGH, Geschäftszahl 14Os144/15f, Entscheidungsdatum 14.09.2016
- Gericht OGH, Geschäftszahl 11Os135/16m, Entscheidungsdatum 17.01.2017

Entre aquellas que conciernen a cuestiones puramente procedimentales encontramos:

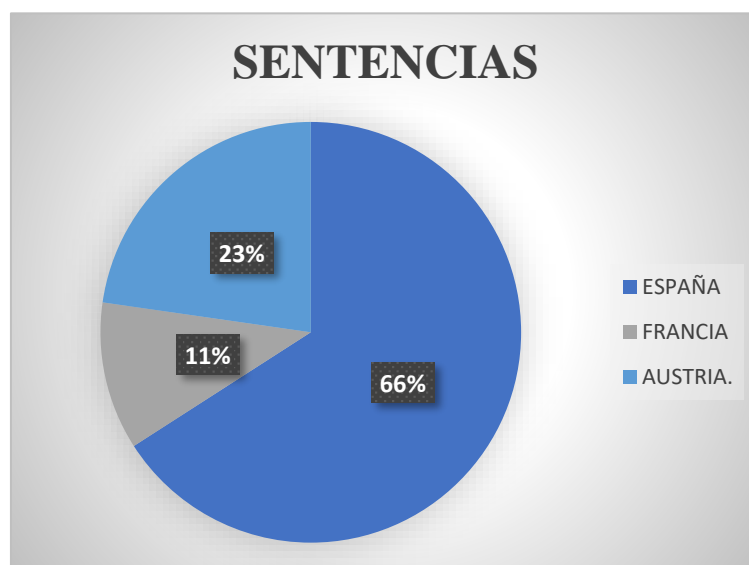
- Gericht OGH, Geschäftszahl 22Os2/15g, Entscheidungsdatum 07.12.2016
- Gericht OGH, Geschäftszahl 12Os150/16z, Entscheidungsdatum 02.03.2017
- Gericht OGH, Geschäftszahl 14Os18/17d, Entscheidungsdatum 04.04.2017

Finalmente, aquellas en las que se interpone recurso solicitando la traducción o interpretación en el procedimiento penal:

- Gericht OGH, Geschäftszahl 12Os77/17s, Entscheidungsdatum 12.10.2017
- Gericht OGH, Geschäftszahl 13Os139/17s, Entscheidungsdatum 14.03.2018

| CUADRO COMPARACIÓN JURISPRUDENCIAL        |        |         |         |
|---|--------|---------|---------|
|   | ESPAÑA | FRANCIA | AUSTRIA |
| Sentencias de impugnaciones de defensa    | 13     | 2       | 3       |
| Sentencias con cuestiones procedimentales | 14     | 2       | 4       |
| Sentencias con recursos de apelación      | 2      | 1       | 2       |
| TOTAL                                     | 29     | 5       | 9       |

**Figura 9.** Cuadro comparativo de sentencias emitidas en el orden penal en materia de traducción e/o interpretación en los tres ordenamientos durante el periodo abril 2015- abril 2018. Elaboración propia.



**Figura 10.** Diagrama con porcentajes de sentencias en materia de traducción e/o interpretación en juicios penales para el periodo abril 2015-abril 2018. Elaboración propia.

#### 8.4. Conclusiones del análisis jurisprudencial

Como podemos apreciar en este barrido cuantitativo, los órganos jurisdiccionales españoles son aquellos que han emitido un mayor número de sentencias en relación con el derecho a la traducción e interpretación a las víctimas o acusados a lo largo de un procedimiento penal. La razón de esta diferencia respecto de los otros dos ordenamientos tal vez radique en problemas derivados de una transposición insuficiente o laxa en el caso español. Como hemos visto en apartados anteriores, Austria y Francia cuentan con un

sistema de preselección de candidatos mucho más riguroso del existente actualmente en España. De ahí que, en muchas de las sentencias nombradas, se alargue el proceso y se interponga recurso por verse vulnerados los derechos y garantías procesales de los encausados durante el juicio al no estar asistidos por intérprete o no traducirse los documentos relevantes del mismo.

Las insuficiencias del actual marco regulador español del que previamente se hablaba en apartados anteriores se puede apreciar con mayor nitidez al contrastarlo con lo previsto en otros países europeos. Por este motivo, he optado por relacionar el actual marco legal en España con la situación en Austria, cuya regulación se considera mucho más avanzada que incluso la propia Directiva 2010/64/UE.

## **9. CONCLUSIONES**

Después del análisis realizado de la transposición de la Directiva 2010/64/UE, podemos extraer una serie de conclusiones del cotejo de la misma con su regulación en los ordenamientos internos de España, Francia y Austria.

Para empezar, es determinante señalar que, en lo que respecta a los aspectos de la legislación previa en materia de traducción e interpretación en juicios penales, en España y Francia no existía un perfil concreto que tuvieran que cumplir aquellas personas que quisieran ejercer como intérpretes. Ni el ordenamiento jurídico francés ni el ordenamiento jurídico español exigían para el desempeño de la profesión ser ni traductor de carrera ni, en su defecto, traductor-intérprete jurado. Sin embargo, Austria sí lo reunía como prerequisite fundamental. De hecho, en el caso español, antes de la reforma de la LECrim, si un caso era urgente, "otra persona conocedora del idioma" podría ser habilitada eventualmente para hacer la función de intérprete, lo que abría la puerta a la incertidumbre y reflejaba el desconocimiento de lo que es la interpretación jurídica, quedando además a merced de cada cual lo que ha de entenderse por "urgente".

En el análisis de la regulación post-directiva, sin lugar a dudas, habría sido útil señalar la diferencia entre intérpretes y traductores, ya que las habilidades y competencias de cada uno son totalmente distintas y no siempre coinciden necesariamente en la misma persona. En España y Francia, por un lado, debería haberse especificado que tanto los traductores como los intérpretes deben tener conocimientos de derecho o, al menos, cierto

dominio de la terminología. Por otro lado, esa especificación debería haber incluido que los intérpretes deberían contar con nociones de mediación intercultural y con una experiencia previa en situaciones reales de tensión.

Dado que nos ubicamos dentro de un contexto jurídico, puede ser interesante recuperar la figura del abogado de guardia, es decir, podría haberse regulado en el registro un apartado destinado a traductores e intérpretes de guardia de todos los idiomas para cada tribunal y comisaria de policía. Los profesionales que diesen su visto bueno se comprometen a estar localizables y a presentarse en las instalaciones en el momento requerido y, consecuentemente, como contraprestación por los servicios prestados de urgencia, sus honorarios podrían ser mayores. No obstante, cabe pensar en buena lógica que un registro de intérpretes presenciales para todos los idiomas y en todas las sedes sería bastante inviable.

Si se coteja la LO 5/2015 con la Directiva 2010/64/UE se puede ver cómo se ha transpuesto el contenido de la Directiva, aunque en algunos casos siguen perpetuándose los vicios de los que adolecía la antigua LECrim. Concretamente, la LO no contiene la condición de poseer una acreditación profesional a través de un examen oficial, que incluya pruebas diseñadas con criterios de objetividad, validez y fiabilidad, para acceder a formar parte del Registro Oficial de Traductores e Intérpretes. La creación de dicho registro está contemplada en la propia LO, aunque no su reglamentación ni su funcionamiento (VV.AA., 2015: 262).

Por esto, resulta necesario que la LO 5/2015 y la ley ordinaria de regulación del Registro Oficial de Traductores e Intérpretes establezcan mecanismos que garanticen la calidad de la interpretación y la traducción de la que trata en todo momento la Directiva 2010/64/UE, para que se adopten, además, la creación de un registro nacional de intérpretes y traductores cualificados e independientes, el acceso al registro mediante acreditación por un órgano competente y la adopción de un código de conducta profesional. Solo así se posibilitaría el ejercicio adecuado entre los intérpretes y los operadores jurídicos y se evitarían malas prácticas que afectaran a los derechos de los acusados.

En definitiva, a la vista de lo que he expuesto en las páginas precedentes, la transposición de la Directiva 2010/64/UE en los tres ordenamientos jurídicos objeto de

análisis supone un gran avance en lo relativo a la exigencia y aplicación práctica del derecho a la asistencia de intérprete y traductor en los procesos penales que acontecen dentro de la Unión Europea. Pero entre ellos puede apreciarse numerosas diferencias en su regulación, lo que repercute a la hora de impartir justicia en las sedes jurisdiccionales de cada país. La propia figura del intérprete judicial requiere una urgente normativa integral en España, ya que algunas de las disposiciones de la nueva LECrim siguen regulando esta cuestión de manera escasa y obsoleta si comparamos su regulación con Austria, que va un paso más allá que la propia Directiva e incluso impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 400.000 euros. En resumen, podemos apreciar que la configuración austríaca regula un sistema lo suficientemente amplio como para dotar a la figura del intérprete judicial de un mínimo de competencias, cualificación y derechos y obligaciones que se requieren para un correcto ejercicio de su profesión.

## **10. BIBLIOGRAFÍA**

### **10.1. Bibliografía**

COBAS, R. Y VALERO GARCÉS, C. (2010). Traducción del libro *Community Interpreting*. S. Hale. England: Palgrave Macmillan. *La interpretación comunitaria: la interpretación en los sectores jurídico, sanitario y social*. Granada: Editorial Comares.

GASCÓN NASARRE, F. A. (2013). «La interpretación judicial en España y Austria». En ALONSO ARAGUÁS, I., BAIGORRI JALÓN, J. y CAMPBELL, H. J. L. (dir.) *Translating the Law. Theoretical and Methodological Issues*. Granada: Editorial Comares, 67-76.

VV. AA. (2015). «La asistencia de intérprete en el procedimiento penal. Especial referencia a su papel en la vista oral». En *Vistas penales. Casos resueltos y guías de actuación en sala*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 253-272.

### **10.2. Webgrafía**

ALBERTO NOTARIO, C. R. (2016). «*Transposición de la Directiva 2010/64/UE relativa a interpretación y a traducción en los procesos penales en Reino Unido y España*».

- Trabajo Fin de Grado. Universidad Pontificia Comillas. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/15309/TFG000999.pdf?sequence=1>>.
- BLASCO MAYOR, M. J. Y POZO TRIVIÑO, M. (2014). «La interpretación judicial en España en un momento de cambio». *MonTI. Monografías de traducción e interpretación* (9-40). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265146984001>>.
- DAOUD, E. Y RENNUIT-ALEZRA, L. (2013). «Le droit à un interprète : la consécration d'un nouveau droit». *AJ Pénal*, p. 527 (1-10). Disponible en: [https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER\\_2015/AJP2.pdf](https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER_2015/AJP2.pdf)>.
- ELÍAS MÉNDEZ, C. (s.f.). «El modelo constitucional austriaco desde la perspectiva de su interacción con el derecho de la Unión Europea». Disponible en: <http://www.ugr.es/~redce/REDCE14/articulos/03CristinaElias.htm>>.
- FUENTES SORIANO, O. (2016). *Esquema órganos jurisdiccionales competencia penal*. [Power Point Slides]. Disponible en: <http://umh1433.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/49/2016/09/%C3%93rganos-jurisdiccionales-y-competencia-penal.-Esquema-Tema-2.pdf>>.
- GASCÓN NASARRE, F. A. (2017). La directiva 2010/64/UE: «Antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y claroscuros de su transposición en España». *Puntoycoma*, 152 (19-31). Disponible en: [http://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc\\_152\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_152_es.pdf)>.
- HEDER, J.C. (2013). «Droit à l'interprétation et à la traduction dans la procédure pénale : le décret du 25 octobre 2013». Village de la justice. La communauté de métiers du droit. Disponible en: <https://www.village-justice.com/articles/droit-interpretation-traduction,15591.html>>
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. R. (2016). *Análisis jurídico de la propuesta de Directiva relativa a los derechos de asistencia letrada y comunicación en los procesos penales y sus posibles consecuencias para el para el ordenamiento jurídico español*. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Valladolid. Disponible en: [https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3323/1/TFM-D\\_0001.pdf](https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3323/1/TFM-D_0001.pdf)>.

JUSTICE.GOUV.FR. (2018). Justice / Portail / L'ordre judiciaire. Disponible en : <http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/>>.

JUSTIZ.GV.AT. (2018). Justizbehörden. Disponible en: <https://www.justiz.gv.at/web2013/home/justiz/justizbehoerden~8ab4a8a422985de30122a91f9c3962d0.de.html>>.

LERNER, P. (2004). «Sobre armonización, derecho comparado y la relación entre ambos». *SciELO Boletín mexicano de derecho comparado*, 111. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0041-86332004000300004](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332004000300004)>.

ORGANISATION JURIDICTIONNELLE NATIONALE FRANÇAISE. (s.f.). En *Wikipedia*. Recuperado el 19 de junio de 2018 de: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Organisation\\_juridictionnelle\\_nationale\\_fr.gif](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Organisation_juridictionnelle_nationale_fr.gif)>.

ROJO CHACÓN, A. (2015). «La transposición al Derecho Nacional de la Directiva Europea 2010/64/UE en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo: Lost in trasposition». *FITISPos International Journal*, 2 (94-109). Disponible en: <http://hdl.handle.net/10017/29502>>.

SANCHO DURAN, J. (2017). «El inminente registro oficial de traductores e intérpretes judiciales». *La linterna del traductor*, 14. Disponible en <http://www.lalinternadeltraductor.org/n14/registro-traductores-interpretes.html>>.

SPANISH2LEARN (2018). Español jurídico en clase de ELE: guía básica - Spanish2learn. Disponible en: < <https://spanish2learn.com/espanol-juridico-clase-ele/>>.

TERRERO CHACÓN, J. L. (2014). «Modificación de la LECrim, para la transposición de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales». En *El informe al anteproyecto de la Ley Orgánica del Estatuto de las víctimas del delito*. Consejo General del Poder Judicial (52-60). Disponible en: <https://www.sisej.com/documentos/otros-documentos-de-interes/.../download>>.



VV. AA. (2012). *Hacia un nuevo modelo de gestión de la traducción y la interpretación judicial*. Manifiesto. Barcelona. Disponible en: <http://www.aptij.es/index.php?l=es&s=n&c=23>.

VV. AA. (2013). *Informe sobre la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales*. Comisión de la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación (CCDUTI) para el Ministerio de Justicia. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/15309/TFG000999.pdf?sequence=1>.

VV.AA. (2014). *Intérpretes alertan sobre el peligro de transponer incorrectamente la Directiva 2010/64/UE sobre interpretación y traducción en procesos penales*. Red Vértice. Disponible en: [http://www.agpti.org/web/uploads/novas/Nota-prensa\\_Red-Vertice-CCDUTI\\_09-04-14.pdf](http://www.agpti.org/web/uploads/novas/Nota-prensa_Red-Vertice-CCDUTI_09-04-14.pdf).

### 10.3. Bibliografía normativo-legal

COMISIÓN EUROPEA (2014): «Paquete de procedimientos por incumplimiento de julio: principales decisiones». Disponible en: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_memo-14-470\\_es.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_memo-14-470_es.htm).

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Boletín Oficial del Estado, núm. 311 de 29 de diciembre de 1978. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>.

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Boletín Oficial del Estado, núm. 243 de 10 de octubre de 1979. Disponible en: [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/dudh.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dudh.html).

DIRECTIVA (UE) 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Diario Oficial de la Unión Europea, L 280, de 26 de octubre de 2006. Disponible en: <https://eur->

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF](http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF)

>.

LEGIFRANCE.GOUV.FR. (2018). *Recherche simple dans la jurisprudence judiciaire Legifrance*. Disponible en: <

<https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1>>.

LEY ORGÁNICA 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado, núm. 157, de 2 de julio de 1985. Disponible en: <

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666>>.

LEY ORGÁNICA 5/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Boletín Oficial del Estado, núm. 239, de 6 de octubre de 2015. Disponible en: <

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/560107-lo-13-2015-de-5-oct-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-para.html)>.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Boletín Oficial del Estado, de 30 de abril de 1977, núm. 103.

Disponible en: <<https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733>>.

PODERJUDICIAL.ES. (2018). CENDOJ: Buscador del Sistema de Jurisprudencia. Disponible en: <<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>>.

REAL DECRETO de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Boletín Oficial del Estado, núm. 260, de 17 de septiembre de 1882. Disponible en: <<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>>.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1989). Caso Kamasinski contra Austria. Sentencia de 19 de diciembre de 1989. Disponible en:

<<http://lawcenter.es/w/file/download/66081>>.